



INICIATIVA BARÓMETRO COLOMBIA

Informe bimestral

Estado Efectivo de la implementación del Acuerdo de Paz de Colombia

Enero de 2021 – febrero de 2021

Programa Matriz de Acuerdos de Paz: Iniciativa Barómetro
Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz
Escuela Keough de Asuntos Globales
Universidad de Notre Dame
Abril de 2021



Mandato del Instituto Kroc

En el epígrafe 6.3.2 del Acuerdo Final, el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC–EP) otorgaron al Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame el mandato de brindar apoyo técnico en el seguimiento y verificación a su implementación. Desde el 2016, el Instituto Kroc ejerce esta labor a través de la Iniciativa Barómetro del programa de la Matriz de Acuerdos de Paz (PAM, por sus siglas en inglés) siendo el Secretariado Nacional de Pastoral Social - Cáritas Colombiana su principal aliado estratégico.

Informes Bimestrales

El Instituto Kroc provee cada dos meses información independiente, imparcial y con rigurosidad académica sobre el estado de la implementación del Acuerdo Final. Los informes bimestrales se presentan a los representantes de las partes firmantes en la Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación (CSIVI), a las entidades implementadoras, a las organizaciones de la sociedad civil, a la comunidad internacional y en general a todos los actores involucrados en la implementación del Acuerdo Final, para impulsar su avance y alimentar el diálogo público sobre el tema. Asimismo, estos informes incorporan hallazgos sobre los enfoques territorial, de género y étnico transversales a la implementación.

Tabla de Contenido

Metodología de la Iniciativa Barómetro del Instituto Kroc.....	3
Conceptos utilizados.....	3
Contexto: enero – febrero de 2021	3
Monitoreo y Plan Marco de Implementación.....	4
Implementación del Acuerdo Final a febrero de 2021	6
Estado de implementación de las 578 disposiciones.....	6
Impacto de la pandemia COVID-19	6
Mirada comparativa entre puntos y enfoques.....	7
Implementación del Punto 1. Reforma Rural Integral.	8
Implementación del Punto 2. Participación Política.	13
Implementación del Punto 3. Fin del Conflicto.....	18
Implementación del Punto 4. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas.....	22
Implementación del Punto 5. Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto.	27
Implementación del Punto 6. Implementación, verificación y refrendación.....	31

Metodología de la Iniciativa Barómetro del Instituto Kroc

Para realizar seguimiento al Acuerdo Final, el Instituto Kroc diseñó una metodología¹ aprobada por la CSIVI en 2017. Liderado por un equipo de investigadores en Colombia y en la Universidad de Notre Dame, el Instituto Kroc evalúa la implementación de 578 disposiciones definidas como compromisos concretos, observables y medibles derivados del texto del Acuerdo, las cuales se encuentran contenidas en una matriz a través de la cual se les asigna una codificación mensual de avance entre 0 (no iniciado), 1 (iniciado), 2 (intermedio) o 3 (completo). Para medir la implementación de los enfoques transversales, se crearon dos submatrices especiales que siguen reglas de codificación diferenciales, una para el enfoque de género (130 disposiciones) y otra para el enfoque étnico (80 disposiciones). La triangulación de fuentes es central para el seguimiento, por lo que se analiza información reportada por entidades del Gobierno Nacional, el Centro de Pensamiento y Diálogo Político (CEPDIPO) del Partido Comunes, informes de las entidades que hacen parte del Componente Internacional de Verificación (CIV), la Misión de Verificación de Nacional Unidas, el Ministerio Público, organizaciones de sociedad civil y una red de más de 500 aliados a nivel territorial.

Conceptos utilizados

El Instituto Kroc utiliza los siguientes conceptos para cualificar los hallazgos y resultados arrojados por su metodología de seguimiento:



Avances: acciones de implementación ocurridas en el periodo bajo análisis que conllevan a movimientos positivos en la codificación.



Retrocesos: acciones u omisiones en el marco de la implementación, cuyo efecto disminuye las probabilidades de completar la disposición involucrada.



Retos: obstáculos o factores que afectan la implementación que, de no adoptar acciones para su superación, podrían conllevar a efectos negativos y limitar aumentos en la codificación.



Rezagos: compromisos que, según el cronograma del Plan Marco de Implementación (PMI), deben reportar mayores avances en el periodo bajo análisis².



Oportunidades: buenas prácticas detectadas que surgen como posibles acciones para acelerar la implementación.

Contexto: enero – febrero de 2021

Los meses de enero y febrero de 2021 estuvieron marcados por una serie de acontecimientos importantes en relación a la implementación del Acuerdo Final.

Grupos armados ilegales continúan generando violencia en diversas regiones del país. Algunos hechos que reflejan esta situación son el reclutamiento forzado de menores en departamentos como Meta y Guaviare, el desplazamiento masivo de más de 11.000 miembros de comunidades étnicas en el Pacífico a raíz de las disputas entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los Caparros y disidencias de las extintas FARC-

EP, los asesinatos selectivos en la región del Bajo Cauca y las amenazas a líderes sociales como las ocurridas en el municipio del Salado.

La sociedad civil se moviliza contra la violencia. Frente a estas manifestaciones de violencia, organizaciones y movimientos sociales levantaron la voz o se movilizaron para protestar y exigir al Gobierno la implementación de medidas efectivas para resolver esta problemática. En el Chocó, la Iglesia y la sociedad civil han exigido que cesen los ataques y el confinamiento de las comunidades indígenas y afrocolombianas. El presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) ha reiterado la gravedad de la crisis social e institucional que enfrenta Buenaventura y Tumaco y, junto con las entidades que componen el Comité Interinstitucional del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) exigieron la presencia integral del Estado y la implementación del Acuerdo Final en estos territorios.

La pandemia continúa impactando la participación y otras actividades en territorio. Aun cuando en enero y febrero no se implementaron cuarentenas o confinamientos estrictos, las medidas de distanciamiento social y restricciones para la realización de eventos presenciales masivos continuaron siendo un limitante para la participación de las comunidades en los escenarios e instancias decisivas del Acuerdo, como los comités técnicos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), los grupos motores de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) o los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia (CTPRC).

Partido Comunes, el nuevo nombre del partido FARC. Durante este periodo se llevó a cabo la segunda asamblea nacional del partido FARC, en la cual los miembros de esta colectividad aprobaron por medio de un procedimiento democrático el cambio de nombre a partido Comunes. Según el presidente del partido político, esto obedece a una apuesta real y transformadora por la Paz de Colombia.

Avances por parte de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). En este bimestre se registró un hito importante en materia de justicia transicional cuando la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) imputó el crimen de lesa humanidad de privación grave de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes a ocho miembros de las extintas FARC-EP. Además, durante el mes de febrero la JEP publicó la cifra estimada de víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008 —6.402 personas— lo que conlleva a redimensionar la magnitud de este fenómeno.

Monitoreo y Plan Marco de Implementación

El Plan Marco de Implementación (PMI) ha sido una herramienta innovadora de política pública para el seguimiento del Acuerdo Final. Estructurado por 501 indicadores, el PMI permite al Departamento Nacional de Planeación (DNP) hacer seguimiento y evaluación de las políticas y programas requeridos para la implementación del Acuerdo³. A medida que el Sistema Integrado de Información para el

Posconflicto (SIIPO) se expande, el PMI provee un marco útil para examinar la implementación a mediano y largo plazo. El PMI y la metodología del Instituto Kroc tienen puntos de divergencia tanto cualitativos como cuantitativos. Pese a lo anterior, en el ejercicio de su mandato, el Instituto Kroc toma en consideración los indicadores del PMI de forma complementaria para enriquecer el análisis de la implementación.

Las dos herramientas fueron desarrolladas en diferentes momentos. El Instituto Kroc inició el proceso de seguimiento en noviembre del 2016 con la creación de una matriz que agrupa 578 disposiciones. En contraste, el PMI está compuesto de 501 indicadores y fue publicado en el 2018. La revisión conjunta de las dos herramientas revela que 290 disposiciones monitoreadas por el Instituto Kroc no son contempladas por el PMI. Esta diferencia se explica en que las disposiciones que ya habían completado su implementación para el 2018 cuando se adoptó el PMI no fueron incluidas en éste. Asimismo, esta discrepancia es consecuencia del nivel de detalle de algunos compromisos que sí son contemplados por la herramienta del Instituto Kroc al basarse en el texto del Acuerdo. Esos mismos compromisos figuran con menos detalle en el PMI pues, en algunos casos, contempla indicadores más generales.

Además, mientras el Instituto Kroc mide disposiciones textuales del Acuerdo Final, **el PMI ha adecuado dichas disposiciones a una lógica de planeación** que asigna entidades responsables y define los años de inicio y finalización para cada indicador. También, **la matriz de seguimiento del Instituto Kroc y el PMI utilizan distintos métodos de medición y de recopilación de datos.** El Instituto Kroc usa una codificación ordinal, a diferencia del PMI que utiliza diversas técnicas de agregación, tales como porcentajes o sumas globales, dependiendo de los objetivos anuales fijados por las entidades gubernamentales responsables. Finalmente, al ser una herramienta de planeación del Estado, **la información con la que se evalúa el avance de la implementación de los indicadores del PMI proviene de fuentes estatales.** En contraste, el Instituto Kroc obtiene su información tanto de entidades gubernamentales, como de órganos de control, organizaciones de sociedad civil, autoridades locales, entre otros.

Implementación del Acuerdo Final a febrero de 2021

Estado de implementación de las 578 disposiciones

Entre enero y febrero de 2021, el Instituto Kroc registró cambios en todos los niveles de implementación, los cuales representan avances desde el periodo bimestral anterior (noviembre y diciembre de 2020) como se refleja en el Gráfico 1. Esto significa que los niveles de implementación incrementaron de manera constante durante enero y febrero.

Impacto de la pandemia COVID-19

En el periodo del informe, el Instituto Kroc no ha evidenciado una alteración cuantitativa de las 578 disposiciones que sea atribuible exclusivamente a las restricciones impuestas a causa del COVID-19.

Como demuestra el Gráfico 2, si bien la proporción de compromisos sin implementar o no iniciados ha disminuido de manera más lenta (-13,1%) en comparación con periodos anteriores, esto puede ser atribuible a otros factores, tales como el diseño y planeación de políticas territoriales, la secuencialidad de los compromisos como establece el PMI, la demora de las instituciones responsables en implementar compromisos del Acuerdo o superar los retos emergentes del proceso de implementación. No obstante, la pandemia ha afectado la dinámica de implementación de algunas disposiciones y es posible que a futuro se pueda detallar su efecto con mayor precisión⁴.

Gráfico 1. Comparación entre periodos bimestrales

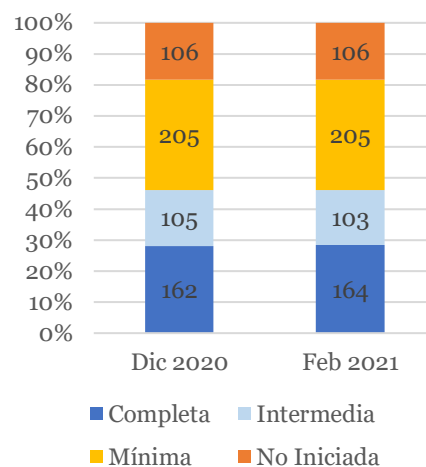
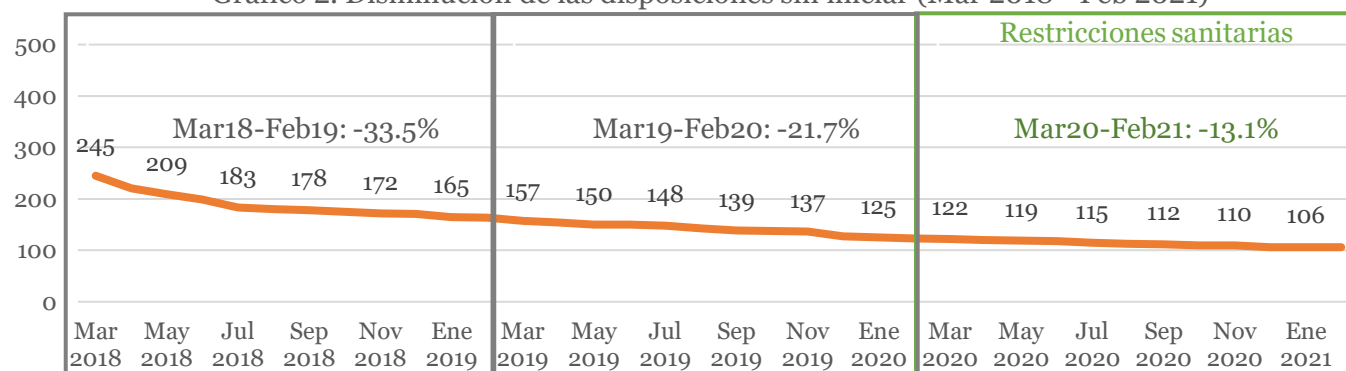


Gráfico 2. Disminución de las disposiciones sin iniciar (Mar 2018 - Feb 2021)

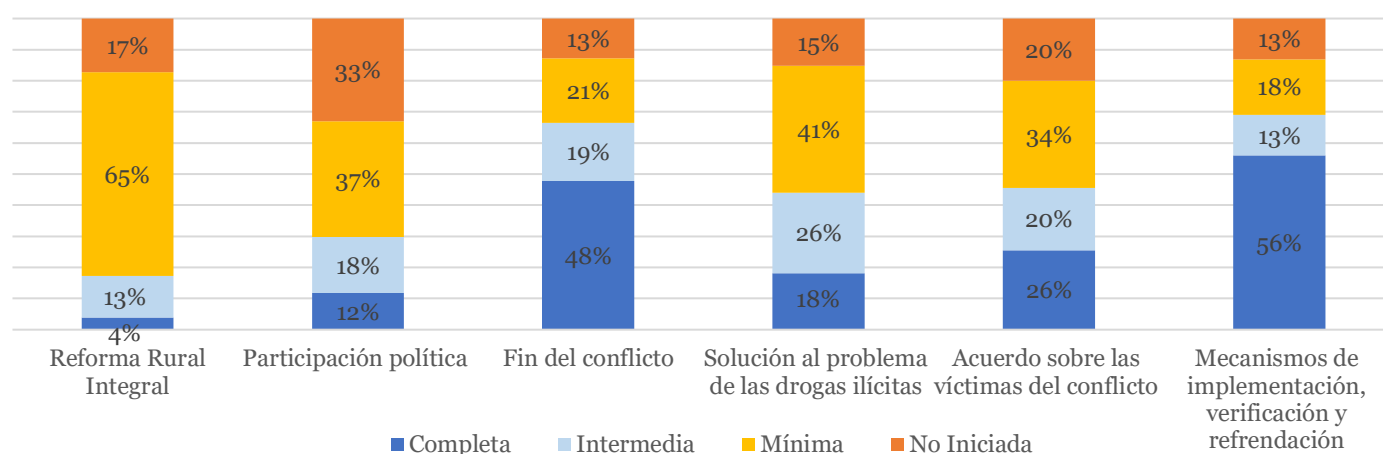


Para contrarrestar los efectos de este nuevo contexto, ha sido alentador observar adaptaciones como la realización virtual de las sesiones interinstitucionales y mesas de impulso de los PDET, los encuentros regionales convocados por el Consejo Nacional de Planeación para discutir los avances y cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y las audiencias virtuales de la JEP. La emergencia sanitaria ha tenido un impacto particular en poblaciones en condición de vulnerabilidad, exacerbando desigualdades para mujeres, población rural y comunidades étnicas⁵.

Mirada comparativa entre puntos y enfoques

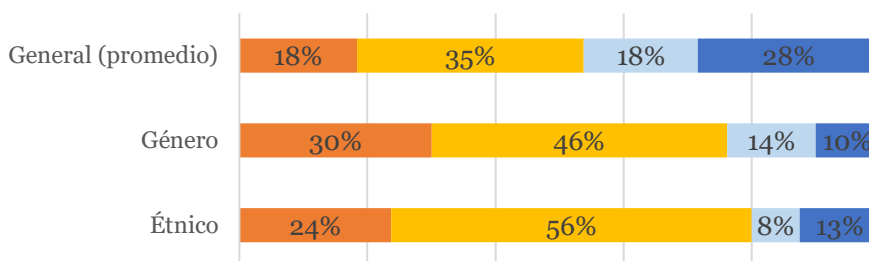
Entre los puntos del Acuerdo Final se perciben marcadas diferencias en cuanto al estado actual de su implementación. Como se muestra en el Gráfico 3, a febrero de 2021, los mayores avances de disposiciones completadas se observan en el Punto 3 (en 48%) y en el Punto 6 (en 56%), con la particularidad de que muchos de los compromisos se completaron en el primer año de vigencia del Acuerdo. En cambio, los niveles más bajos de disposiciones completas se evidencian en el Punto 1 (en 4%), en el Punto 2 (en 12%) y en el Punto 4 (en 18%). Estos niveles bajos se deben, en parte, a que se trata de disposiciones cuya implementación está contemplada en el largo plazo y a la falta de celeridad para iniciarlas. Se constatan rezagos significativos de las metas y plazos establecidos en el PMI que también reflejan estos niveles mínimos.

Gráfico 3. Estado de implementación por Punto del Acuerdo Final, febrero de 2021



Desde la firma del Acuerdo Final, se ha observado una brecha entre la implementación general de los enfoques transversales de género y étnico y la del Acuerdo que persiste en el periodo de análisis⁶. Ambos enfoques registran menores proporciones que el Acuerdo en su totalidad como se observa en el Gráfico 4.

Gráfico 4. Implementación de los enfoques transversales



Implementación del Punto 1. Reforma Rural Integral.

PRINCIPALES AVANCES DESDE 2016 Compromisos en nivel intermedio y completo	PRINCIPALES PENDIENTES A FEBRERO 2021 Compromisos no iniciados o apenas iniciados
Acceso a tierras ✓ Conformación del Fondo de Tierras a través del Decreto 902 de 2017 que administra más de un millón de hectáreas (2017). ✓ Financiación y regulación del Catastro Multipropósito (2020). ✓ Estrategias para fortalecer capacidades para la resolución alternativa de conflictos en municipios priorizados (2020).	... Acelerar la adjudicación de tierras a través del Fondo de Tierras. ... Implementar otras medidas para garantizar el acceso a tierra y descongestionar los procesos agrarios rezagados. ... Nutrir el Fondo de Tierras, por ejemplo, mediante la recuperación de los baldíos indebidamente apropiados. ... Apoyar planes de desarrollo de las Zonas de Reserva Campesina constituidas. ... Tramitar el proyecto de ley que crea la especialidad agraria.
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) ✓ 1.053 obras PDET terminadas (01-2021). ✓ Elaboración de 3 Hojas de Ruta PDET (Catatumbo, Sur de Bolívar y Sur de Córdoba) (01-2021).	... Elaborar las 13 Hojas de Ruta pendientes para la implementación de los PDET en cada región. ... Socializar en las regiones los planes de acción PDET 2021, producto de las mesas de impulso para la coordinación de iniciativas PDET.
Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral ✓ 9 de 16 Planes Nacionales aprobados (01-2021).	... Aprobar los 7 Planes Nacionales: Salud, Agua potable y saneamiento básico rural, Formalización, Zonificación ambiental, Educación, Asistencia técnica y Derecho a la alimentación.
OPORTUNIDADES PARA DINAMIZAR LA IMPLEMENTACIÓN	
➤ Agencia Nacional de Tierras (ANT): Garantizar a través de la ANT una destinación presupuestal suficiente para implementar las iniciativas para el acceso a la tierra. ➤ Agencia de Renovación del Territorio (ART): capacitar a actores locales en la habilitación de iniciativas de los PDET, especialmente para completar la caracterización de su alcance.	

Gráfico 1a. Niveles mensuales de implementación de las disposiciones del Punto 1 (Dic. 2016 - Feb. 2021)

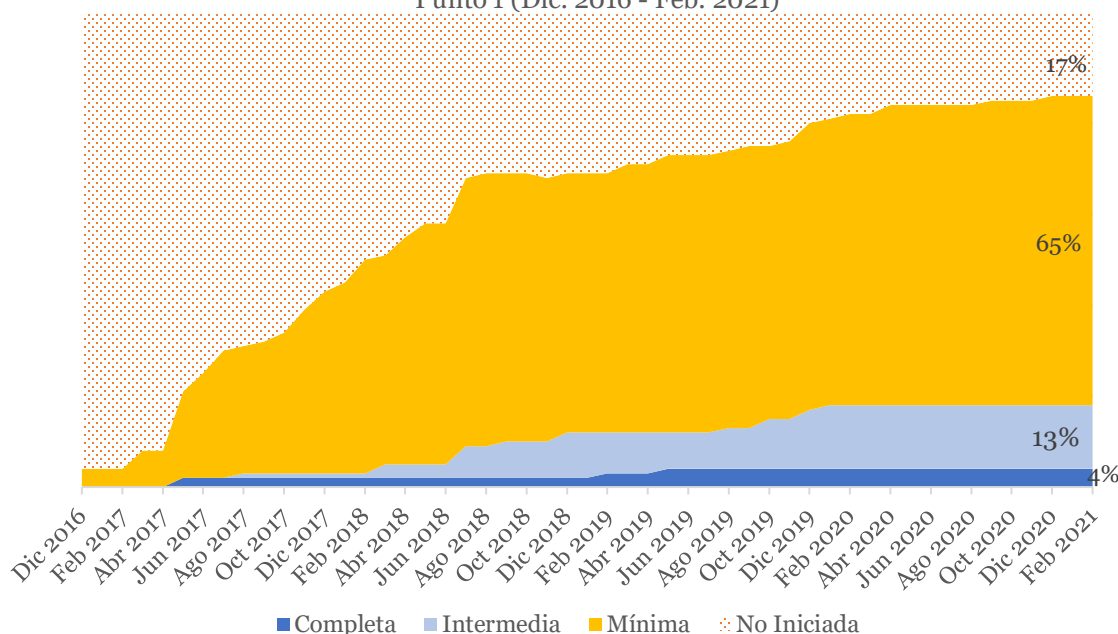
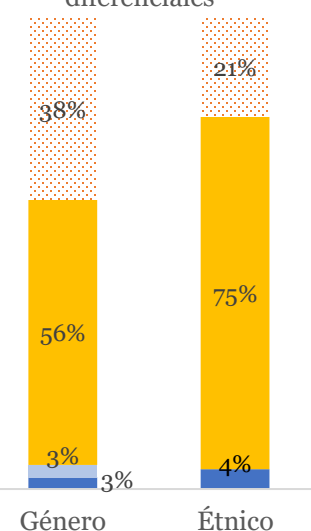


Gráfico 1b. Enfoques diferenciales





Avances bimestrales en el Punto 1

Aprobación de dos Planes Nacionales. El 29 de diciembre de 2020 fueron aprobados el Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural (PLANFES)⁷ y el Plan Progresivo de Protección Social y Garantía de los Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras Rurales⁸. Según el PMI, ambos planes se encontraban rezagados con una fecha de inicio de 2017. El PLANFES tiene por objetivo estimular diferentes formas asociativas de trabajo de pequeños y medianos productores y productoras, basadas en la solidaridad y la cooperación, promoviendo la autonomía económica y la capacidad organizativa en especial de las mujeres rurales. Este plan busca fortalecer la capacidad de acceder a bienes y servicios y la comercialización de sus productos. Su implementación es a nivel nacional con una focalización prioritaria en los municipios que hacen parte de las subregiones PDET y del PNIS. También, el PLANFES prioriza las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC).

1.3.3.1.
Estímulos a la economía solidaria y cooperativa

El objetivo del Plan Progresivo de Protección Social y Garantía de los Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras Rurales es fortalecer el sistema de protección y seguridad social con enfoque diferencial. Este plan busca fomentar los principios y derechos fundamentales en el trabajo, para ayudar a superar la pobreza y la desigualdad de la población rural, promoviendo la integración y el cierre de brechas entre el campo y la ciudad para alcanzar el bienestar de la población.

1.3.3.5.
Formalización laboral rural y protección social

Publicación de dos Hojas de Ruta PDET. En enero de 2021, se publicaron las Hojas de Ruta para las subregiones PDET de Sur de Bolívar⁹ y Sur de Córdoba¹⁰. La Hoja de Ruta es una herramienta para priorizar las más de 32.000 iniciativas PDET y empezar a articular su implementación con otros programas del Acuerdo Final, como los Planes Nacionales de la Reforma Rural Integral (RRI).

1.2. Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

Enfoques diferenciales en el PDET

A principio del 2021, la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación (CPEC) y la ART, presentaron el avance de los indicadores e iniciativas étnicas y de género¹¹ señalando lo siguiente:

- De las 32.808 iniciativas PDET, 8.381 (25.5%) son propias étnicas y 4.606 (14%) tienen etiqueta de género y mujer rural. Se han incorporado 10.527 iniciativas PDET en planes de trabajo 2020 – 2021 de entidades y gobiernos locales, de las cuales 2.382 cuentan con ruta de implementación activa distribuidas así: 242 iniciativas propias étnicas, 687 comunes étnicas y 1.453 iniciativas no étnicas. Chocó es la Subregión PDET con mayor número de iniciativas con ruta de implementación activa a través de 50 iniciativas propias étnicas, seguida de la Subregión Pacífico Medio con 43 iniciativas propias étnicas. De estas 4.606 iniciativas de género, 1.458 están en los planes de desarrollo municipales y 192 en los planes de desarrollo departamental.
- Para las fases de implementación y seguimiento del componente étnico de los PDET, la ART construyó una propuesta de lineamiento técnico – operativo para la participación de los Pueblos Indígenas y Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. Dicho documento, que fue concertado con las autoridades étnicas que participaron en la construcción del PDET, plantea las pautas de relacionamiento para la participación de los grupos étnicos de cada subregión PDET.



Retos destacados en el Punto 1 durante el bimestre

Reducida financiación y priorización en los procesos de acceso y uso de la tierra. El 7 de enero de 2021, la Procuraduría General de la Nación (PGN) publicó un informe temático especial denominado “Informe sobre el estado del avance de la implementación de las estrategias de acceso a tierras y uso del suelo rural contempladas en el acuerdo de paz”¹². Este informe contiene 124 reflexiones, que destacan la necesidad de implementar múltiples medidas de mejora en los procedimientos de política de tierras, fortalecimiento institucional (especialmente de la ANT) y un compromiso financiero para maximizar el impacto de cumplimiento de los componentes del Punto 1.1. del Acuerdo Final. En particular, la PGN reporta que los cuatro proyectos claves de este punto por parte de la ANT (acceso a tierras, ordenamiento social de la propiedad, formalización y regularización) han estado desfinanciados con un déficit presupuestal de más del 50% durante los últimos 3 años. Además, el reporte constata que **8 de las 16 zonas PDET**¹³ **tienen muy poca representación en el Fondo de Tierras.** Este informe destaca que sólo el 10% de las hectáreas de tierra que han ingresado al Fondo se encuentran disponibles para ser distribuidas. También indica que se mantiene la priorización del modelo de atención por demanda, a pesar de los esfuerzos del Gobierno por la definición de una nueva política de ordenamiento social de la propiedad rural dirigida a la atención masiva y eficiente de las situaciones jurídicas relacionadas con el acceso a la tierra y la formalización de la propiedad rural en zonas focalizadas. Finalmente, la PGN considera que los reportes de información de la ANT no permiten diferenciar entre adjudicación y formalización de tierra, lo cual impide hacer seguimiento detallado a las metas de cada uno de estos indicadores del PMI¹⁴.

1.1.1. Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral

Enfoque étnico: la PGN recomienda mejorar el acceso a tierras y al uso del suelo rural

En su informe del 7 de enero, la PGN destacó aspectos positivos y negativos de la implementación del enfoque étnico. En lo positivo, el informe señala que el 93,4% de las 40.263,9 hectáreas formalizadas (con acto administrativo registrado después de la firma del Acuerdo de Paz en adjudicación de predios baldíos a persona natural) corresponde a títulos colectivos de comunidades negras y constitución y ampliación de resguardos indígenas. En lo negativo, el informe indica que el piloto del Catastro Multipropósito en Ovejas (Sucre) evidenció una débil inclusión de asuntos y conflictos étnicos en el proceso de recolección de información. Por ejemplo, los niveles de participación de las comunidades en los procesos de levantamiento de información fueron bajos y aún se evidencian conflictos entre colonos y comunidades étnicas por la titulación de algunos predios. Entre sus recomendaciones, la PGN señaló que la ANT debe articularse con la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) para garantizar que todas las adjudicaciones directas de tierras a los beneficiarios a título gratuito y a los pueblos y comunidades étnicas, estén acompañadas de un proyecto productivo sostenible económica, social y ambientalmente. Lo anterior, teniendo en cuenta la participación de las y los beneficiarios y su armonización, entre otros, con los PDET y los planes de desarrollo sostenible de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC).

Criterios de habilitación y maduración de las iniciativas PDET en Hojas de Ruta. El proceso de planeación participativa de PDET identificó más de 32.000 iniciativas para ser implementadas en subregiones PDET. A febrero 2021, sólo 3 de las 16 Hojas de Ruta están formuladas, estas herramientas estructuran iniciativas PDET bajo dos criterios. Primero, se examina si las iniciativas están *habilitadas*. Eso significa que la iniciativa debe cumplir con tres elementos: una descripción de su alcance (qué, cuánto y dónde), posibles

fuentes de financiamiento, y el responsable institucional de la propuesta. Segundo, en paralelo con el proceso de habilitación, la ART caracteriza la “trayectoria de *maduración*” de las iniciativas como media, baja o alta. Esta trayectoria identifica “el avance en el proceso de transformación de las iniciativas hacia proyectos o acciones listas para su implementación” y toma en cuenta tres elementos: el nivel de estructuración o formulación técnica, la disposición de financiación y el nivel de apropiación de los instrumentos de planeación territorial o sectorial de la institución responsable¹⁵.

Desafíos con la habilitación de las tres Hojas de Rutas existentes. A enero de 2021, entre 85% y 92% de las iniciativas en las tres Hojas de Ruta elaboradas no cumplen el primer criterio al no estar habilitadas. Esto se debe principalmente a que falta definir el elemento del “alcance” que es insuficiente en el 72% de las iniciativas evaluadas en Catatumbo¹⁶, 90% en Córdoba¹⁷ y 92% en Bolívar¹⁸. Lo anterior contrasta con los resultados en la evaluación del elemento de “fuentes identificadas de financiación” que no se satisface en el 26% en Catatumbo, 11% en Córdoba y 18% en Bolívar y del elemento “responsables institucionales identificados” que no se satisface en el 34% en Catatumbo, 1% en Córdoba y 0% en Bolívar.

Desafíos con la maduración de tres Hojas de Ruta elaboradas. El porcentaje de iniciativas sin ninguno de los elementos del criterio de maduración activas es alto¹⁹ y según la Hoja de Ruta de Catatumbo esto “evidencia la necesidad de articular los esfuerzos de las entidades nacionales y territoriales para la formulación de proyectos que estén estrechamente relacionados con las iniciativas formuladas”²⁰.



Rezagos del Punto 1 según el PMI

Según el PMI, hay 22 indicadores del Punto 1 que se debieron cumplir en 2020 o antes, de los cuales seis presentan rezagos o no tienen ficha técnica en el SIPO²¹. A continuación, se detallan dos de estos indicadores que particularmente afectan la coordinación de implementación de políticas rurales.

Persisten demoras en aprobación de Planes Nacionales (indicador A.456). De los 16 Planes Nacionales de la RRI, 7 no han sido aprobados. Por su alcance nacional, estos planes deben proveer un marco de política de desarrollo que pueda ser adoptado por los PDET y los planes de desarrollo departamentales y municipales. Sin embargo, esto no ha sido posible, pues se definieron las iniciativas PDET y los planes territoriales de desarrollo sin conocerse previamente los contenidos de muchos planes, lo que generó la necesidad de construir las Hojas de Ruta Única (una por PDET) para coordinar las diferentes estrategias.

Falta aprobación del Plan Nacional de Zonificación Ambiental (indicador A.E.18). La falta de este plan, tanto como el **Plan de Formalización Masiva**²², que igualmente está rezagado, es particularmente problemático en la medida en que contienen lineamientos sustanciales que deberían orientar la operación de las entidades implementadoras de la RRI. Aunque dichas entidades ya han puesto en marcha acciones relacionadas con la zonificación ambiental y la formalización de la propiedad rural, este rezago dificulta su coordinación, el control ciudadano y el seguimiento a la implementación integral de las medidas que favorecen el acceso a la tierra, la regularización de los derechos de propiedad, así como el ordenamiento productivo y ambiental de los territorios rurales.

»» **Oportunidades para dinamizar la implementación del Punto 1**

Garantizar a través de la ANT una destinación presupuestal suficiente para implementar las iniciativas para el acceso a la tierra. Esto en particular para los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y la Zonificación ambiental participativa y detallada, para poner en marcha las estrategias de ordenamiento territorial y así evitar conflictos socioambientales.

La ART puede capacitar a actores locales en la habilitación de iniciativas PDET, especialmente para completar la caracterización de su alcance, que es el cuello de botella identificado en este periodo. De esta forma las iniciativas tendrán la caracterización adecuada para convertirse en proyectos de inversión y de forma concomitante se fortalecerán las capacidades técnicas locales y el diálogo con las comunidades PDET.

El Instituto Kroc anticipa avances en las siguientes áreas que ofrecen también oportunidades de implementación:

- Reglamentación de la Ley de Compras Públicas por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
- Articulación de las iniciativas PDET con los 9 Planes Nacionales de RRI (y los 7 que faltan por formular y/o aprobar).
- Aprobación en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes del proyecto de Ley Estatutaria para la nueva especialidad agraria (indicador A.11 en el SIIPO).

Implementación del Punto 2. Participación Política.

PRINCIPALES AVANCES DESDE 2016 Compromisos en nivel intermedio y completo	PRINCIPALES PENDIENTES A FEBRERO 2021 Compromisos no iniciados o apenas iniciados
Derechos y garantías para la oposición y la participación política ✓ Aprobación del Estatuto de Oposición con medidas de enfoque de género (2017).	... Asegurar la implementación territorial del Estatuto de Oposición.
Mecanismos democráticos de participación ciudadana ✓ Puesta en marcha del Sistema de Rendición de Cuentas de la Implementación del Acuerdo de Paz (SIRCAP) (2018). ✓ Aprobación de la nueva reforma al Código Electoral en el Congreso de la República para actualizar el Código de 1986 (2020). ✓ Financiación de producción y divulgación de contenidos audiovisuales y radiales que promuevan una cultura de paz (agosto- septiembre 2020) ✓ Asignación de 23.500 cupos en la Escuela de Formación de Líderes Sociales del Ministerio del Interior y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (01-2021).	... Ajustar normas que promuevan los mecanismos de diálogo y vigilancia y control a las autoridades para prevenir el uso excesivo de la fuerza, como garantías para el ejercicio de la protesta pacífica. ... Aprobar una reforma a la Ley 152 de 1994. ... Otorgar garantías a la participación ciudadana mediante los ajustes normativos pendientes. ... Vincular a las universidades públicas a campañas para promover la participación ciudadana y el control social.
Medidas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local ✓ Lanzamiento de una aplicación para el Sistema de Denuncia Electoral (URIEL) (2019). ✓ Nueva facultad de la Registraduría para crear puestos de votación en zonas rurales y de presencia de comunidades étnicas mediante la reforma al Código Electoral (12-2020).	... Aprobar las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. ... Definir y aprobar la reforma política que contemple nuevas reglas de juego democrático, siguiendo las recomendaciones de la Misión Electoral Especial. ... Articular las distintas iniciativas institucionales de pedagogía en temas de cultura política democrática.
OPORTUNIDADES PARA DINAMIZAR LA IMPLEMENTACIÓN	
► Corte Constitucional: atender a las intervenciones ciudadanas en el examen de constitucionalidad de la reforma al Código Electoral, y corregir el déficit de participación en el trámite legislativo y la omisión del censo electoral en la auditoría técnica. ► Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia: continuar con la ejecución de su plan de acción 2020-2021. ► Ministerio del Interior: incorporar las recomendaciones de la sociedad civil y el Ministerio Público para avanzar en las reformas normativas pendientes sobre movilización y protesta pacífica y el control del uso de la fuerza. ► Ministerio del Interior: garantizar condiciones de accesibilidad y conectividad a internet a líderes y lideresas rurales para programas como la Escuela de Formación de Líderes Sociales. ► CPEC y Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP): diseñar los lineamientos de rendición de cuentas del SIRCAP a nivel territorial con enfoque de género.	

Gráfico 2a. Niveles mensuales de implementación de las disposiciones del Punto 2 (Dic. 2016 - Feb. 2021)

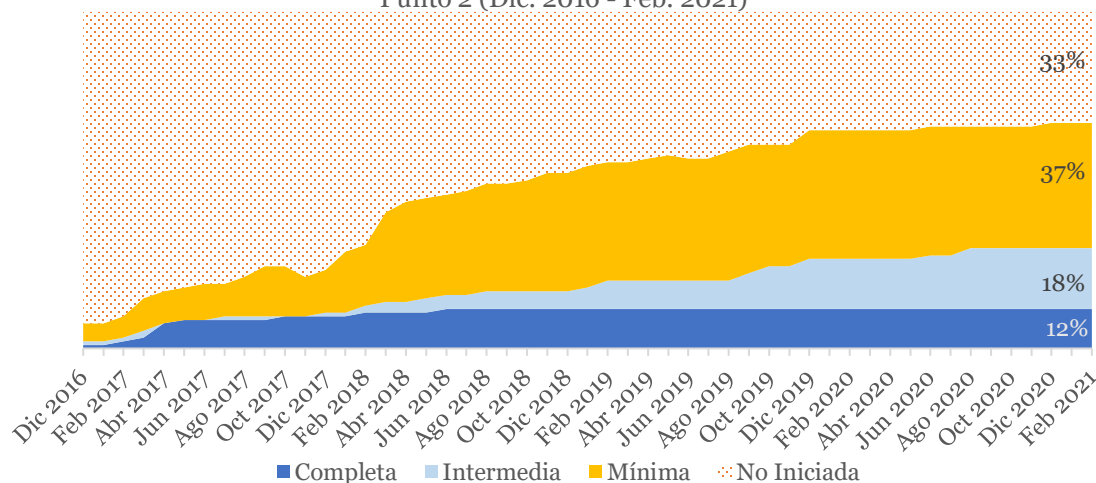
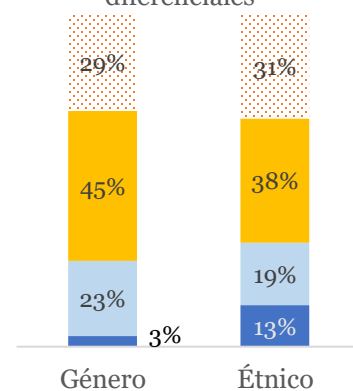


Gráfico 2b. Enfoques diferenciales





Avances bimestrales en el Punto 2

La reforma al Código Electoral aprobada está en manos de la Corte Constitucional. El 18 de diciembre de 2020, el Congreso aprobó la nueva reforma al Código Electoral para actualizar el Código de 1986²³. El 19 de enero de 2021, el proyecto de ley fue remitido a la Corte Constitucional para el control de constitucionalidad²⁴. Algunos actores de la sociedad civil, como la Fundación Karisma, han advertido que esta reforma no se basó en evidencia, no fue objeto de un proceso de amplia participación ciudadana y se aprobó con mensaje de urgencia, lo cual impidió profundizar en su deliberación²⁵.

2.3.2
Promoción de la
participación
electoral

Contenidos del nuevo Código Electoral. Entre las medidas previstas en la reforma y que desarrollan disposiciones del Acuerdo Final, se dispuso la realización de jornadas de cedulación para la población vulnerable en zonas urbanas y rurales (art. 41); se otorgó la facultad a la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) de crear, fusionar y trasladar puestos de votación en zonas rurales, resguardos y consejos comunitarios (art. 123); se incluyó aplicar la paridad a las listas de las corporaciones de elección popular (art. 84); se incluyeron mecanismos de inclusión para personas en condición de discapacidad y de las personas LGBTI (art. 85); y se definió qué se entiende por violencia contra las mujeres en política, con sus respectivas acciones preventivas y sancionatorias por parte de los partidos políticos y las autoridades electorales (art. 253)²⁶. Asimismo, se aprobó el voto electrónico mixto (art. 157), lo cual se implementará progresivamente con planes pilotos vinculantes, atendiendo de forma prioritaria a los territorios PDET (art. 242, 243, 244). Se estableció que el proceso electoral contará con un plan de auditoría técnica imparcial para las tecnologías usadas en cada proceso, cuyos reclamos y resultados se consolidarán por la Organización Electoral (art. 251, 252), pese a que se omitió la mención explícita de hacer auditoría al censo electoral. Por otra parte, se dispuso que la biometría será usada para identificar a los electores, la RNEC podrá reglamentar la utilización de las herramientas tecnológicas relacionadas (art. 163) y habrá sistemas de asistencia tecnológica (art. 242). En materia de pedagogía, se aprobó que la organización electoral realice proyectos para promover la participación ciudadana, fortalecer la democracia y difundir valores democráticos y cívicos. Adicionalmente, el Ministerio de Educación y la RNEC diseñarán herramientas para incentivar la formación en democracia en la educación media²⁷.

Estandarización en la rendición de cuentas sobre la implementación del Acuerdo. El 25 de enero de 2021, después de algunos retrasos en su diseño territorial, el DAFP y la CPEC publicaron la circular conjunta 100-001-2021 que establece lineamientos para la rendición de cuentas sobre la implementación del Acuerdo Final a nivel nacional y en los territorios PDET. Estos lineamientos se dirigen específicamente a las alcaldías²⁸ para que públicamente puedan presentar sus avances por cada uno de los 8 pilares del PDET. Antes de la expedición de la Circular, el DAFP, la ART, el DNP y la CPEC realizaron mesas técnicas para definir la capa territorial del SIRCAP basado en los PDET, tomando en cuenta los proyectos estructurados con OCAD Paz, el trabajo hecho al respecto por la ART y la incorporación del PDET en la planeación municipal.

2.2.5. Control
y veeduría
ciudadana

Socialización de lineamientos con autoridades locales. El 27 de enero de 2021, el DAFP organizó una jornada de socialización de la circular conjunta 100-001-2021 con las alcaldías de municipios PDET que, entre otras cosas, establece que las entidades nacionales y territoriales “publiquen el informe anual de rendición de cuentas, implementen acciones de diálogo y desplieguen estrategias de divulgación de avances”²⁹.

Cupos asignados para la Escuela de Formación de Líderes Sociales. Entre octubre de 2020 y enero de 2021, hubo avances con la implementación de la Escuela de Formación de Líderes Sociales del Ministerio del Interior y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Según el Ministerio del Interior, hasta enero de 2021 se asignaron cerca de 23.500 cupos a líderes y lideresas de todos los sectores sociales y pertenecientes a diferentes regiones del país³⁰. Según la CPEC, a diciembre de 2020, con la creación de la Escuela de Formación de Líderes Sociales, se establecieron para las comunidades indígenas 7.520 créditos (cupos para diplomados y cursos). A enero se informó sobre la inscripción efectiva de 2.020 líderes de comunidades indígenas³¹.

2.3.5. Promoción de una cultura política democrática y participativa

Enfoque de género en la Reforma Electoral: Paridad en las listas

La reforma al Código Electoral incorporó disposiciones para asegurar la paridad de género, al establecer que las listas para cargos de elección popular de corporaciones públicas y las consultas que elijan cinco o más curules tendrán el 50% de mujeres, mientras que las listas de menos de cinco curules estarán compuestas por el 30% de mujeres. Se aprobó la definición y sanción de la violencia política contra las mujeres y mecanismos de democracia interna para promover la inclusión de personas con discapacidad y las personas LGBTI en las organizaciones políticas. La paridad fue una medida para promover una mayor participación electoral de las mujeres y lograrlo fue producto de la incidencia de organizaciones de mujeres, congresistas y acompañantes internacionales que apoyaron la reforma como el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD). Sin embargo, el texto aprobado no incluyó las listas cerradas y en alternancia.



Retos destacados en el Punto 2 durante el bimestre

El Gobierno emite un Protocolo para la protección del derecho a la protesta. El 5 de enero de 2021, los ministerios del Interior y de Defensa emitieron el Decreto 03 de 2021 “Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado ‘Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana’”³². Este Protocolo se adopta como consecuencia de las órdenes emitidas en la sentencia STC7641-2020 de la Corte Suprema de Justicia del 22 de septiembre de 2020, decisión proferida en el marco de una acción de tutela presentada por diferentes organizaciones de derechos humanos³³. El Protocolo fue concebido para establecer acciones preventivas, concomitantes y posteriores a la protesta pacífica, teniendo como primacía el diálogo y la mediación para la intervención en las protestas y ofrecer orientaciones para el uso de la fuerza, con base en el marco normativo existente.

En los espacios de participación para la construcción del Protocolo, tanto los accionantes de la tutela, como la Alcaldía Mayor de Bogotá, propusieron mayor participación de la sociedad civil en los puestos de mando unificado (PMU) en los términos de la Resolución 1190 de 2018, una revisión de las acciones

2.2.2. Garantías para la movilización

de la Fuerza Pública, y ajustes normativos en las resoluciones emitidas por la Policía Nacional sobre atención de la protesta social, entre otros. Estas propuestas no fueron aprobadas por el Gobierno Nacional en el nuevo Protocolo, argumentando que aquellas no fueron requerimientos de la sentencia y a que las resoluciones de la Policía Nacional a ajustar, no involucraban criterios para el uso de fuerza, entre otras razones. Ante esta situación, algunas organizaciones de la sociedad civil, incluyendo apoderados de víctimas de violencia policial, emitieron un comunicado conjunto el 14 de enero de 2021 en el que concluyeron que esta nueva reglamentación era “una declaración de principios que en lo operativo no modifica sustancialmente ningún aspecto de la actuación de la Policía Nacional en manifestaciones, la cual a lo largo del 2020 continuó siendo arbitraria y desproporcionada”³⁴.

Estandado el Pacto Político Nacional para nunca más utilizar la violencia en la política.

Diferentes actores han advertido la necesidad de lograr este pacto político, entre ellos el Secretariado Nacional de Pastoral Social (SNPS). Este último recientemente invitó a consolidar un pacto nacional por la reconciliación que involucre tanto a las partes firmantes del Acuerdo Final como a otros sectores de la sociedad colombiana³⁵. A pesar de estos pronunciamientos y de que el plan de acción 2020-2021 del CNPRC incluyó impulsar el Pacto Político Nacional³⁶, aún no se tiene evidencia de su puesta en marcha.

3.4.2. Pacto Político Nacional



Rezagos del Punto 2 según el PMI

Según el PMI, hay 28 indicadores del Punto 2 que se debieron cumplir en 2020 o antes, de los cuales 12 tienen rezagos o no tienen ficha técnica en el SIPO³⁷. A continuación, se enuncian algunos de estos indicadores que particularmente afectan la participación ciudadana.

Desafíos institucionales del mecanismo para las denuncias contra la corrupción (indicador B.154 del SIPO). En septiembre de 2020, la PGN y la Contraloría General de la República (CGR) informaron que el Mecanismo de Denuncias por hechos asociados a la corrupción y con énfasis en la veeduría de los recursos para la implementación del Acuerdo Final mantiene un rezago. Según la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, este mecanismo “ha sido un desafío de articulación institucional”, ya que su discusión técnica data desde 2017³⁸. Las demoras en la creación de este mecanismo evidencian las diferencias entre las entidades de control en materia de competencia y gestión para atender las denuncias. Por esta razón, el 15 de diciembre de 2020, la PGN se reunió con la Secretaría de Transparencia, la CGR, la Defensoría del Pueblo, el Archivo General de la Nación, el DNP y la CPEC, donde se decidió que cada entidad crearía un protocolo interno para atender las denuncias. Preliminarmente, sólo habría tres protocolos correspondientes a la PGN, la Secretaría de Transparencia y la CGN, pero para cumplir con este compromiso, se espera sincronizar los esfuerzos en un mecanismo unificado³⁹. Esta decisión puede afectar el cumplimiento de la finalidad perseguida por la creación del mecanismo, en la medida en que se dispersan los esfuerzos, capacidades y recursos para atender de forma concentrada las denuncias por corrupción.

Pendientes los ajustes normativos para el fortalecimiento de la planeación participativa, la creación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz y las garantías de la

participación (indicadores B.MT.4, B.129, B.158 y B.G.6 en SIIPO). La Contraloría Delegada para el Posconflicto⁴⁰ y CEPDIPO⁴¹ coincidieron en que no había avances significativos en la expedición de la ley de garantías y promoción de la participación ciudadana, el acto legislativo para la reforma política, y la reforma a la Ley 152 de 1994 sobre el Plan de Desarrollo para reestructurar la planeación participativa.



Oportunidades para dinamizar la implementación del Punto 2

Atender las intervenciones ciudadanas en el examen de constitucionalidad de la reforma al Código Electoral. La Corte Constitucional tiene la oportunidad de integrar al estudio de la reforma electoral, los conceptos ciudadanos que se presenten en el marco del proceso de control de constitucionalidad y con ello corregir a la vez el déficit de participación que se haya podido presentar durante el trámite legislativo, la omisión explícita del censo electoral dentro del proceso de auditoría técnica y la no conformación paritaria de las listas de menos de cinco curules.

Tomar en consideración las recomendaciones de la sociedad civil y del Ministerio Público en la discusión sobre el nuevo Protocolo para proteger la protesta. Lo anterior para avanzar en las reformas normativas pendientes sobre movilización y protesta pacífica y el control del uso de la fuerza por parte del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa.

Garantizar condiciones de accesibilidad y conectividad a internet a líderes y lideresas. La Escuela de Formación de Líderes Sociales está dirigida a liderazgos que, en su mayoría, se ejercen en sectores rurales con baja o nula conectividad. Por esta razón, para asegurar el acceso a la información y la participación, el Ministerio del Interior tiene la oportunidad de articular las zonas de intervención de este programa con la implementación del Plan de Conectividad Rural de la RRI para subsanar los obstáculos de la infraestructura limitada y las brechas digitales que persisten en muchos territorios rurales.

Diseñar los lineamientos de rendición de cuentas del SIRCAP a nivel territorial con enfoque de género. Bajo la orientación de la CPEC y el DAFP, fortalecer la rendición de cuentas con enfoque de género en las alcaldías PDET. Estos ejercicios deberían extenderse a las gobernaciones PDET y a otras autoridades locales que no cuentan con PDET, pero que tienen responsabilidad en la implementación de otros compromisos del Acuerdo Final, como ocurre con los territorios PNIS o con los CTPRC.

En los próximos meses, el Instituto Kroc anticipa avances en las siguientes áreas del Punto 2, que a su vez ofrecen oportunidades para la implementación:

- Discusión de la Política de reconciliación, convivencia y prevención de la estigmatización.
- Apertura de convocatoria de adjudicación de emisoras comunitarias con enfoque étnico.

Implementación del Punto 3. Fin del Conflicto.

PRINCIPALES AVANCES DESDE 2016 Compromisos en nivel intermedio y completo	PRINCIPALES PENDIENTES A FEBRERO 2021 Compromisos no iniciados o apenas iniciados
Cese al fuego y de hostilidades y dejación de armas ✓ Proceso exitoso de cese al fuego y dejación de armas de las extintas FARC-EP (2017).	
Reincorporación socio-política de FARC-EP a la vida civil ✓ Formulación de la Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica de Exintegrantes de las FARC-EP (2018). ✓ Construcción del programa CaPAZcidades, dirigido a las personas en proceso de reincorporación con discapacidad, con enfermedades de alto costo y adultos mayores (2020).	...Avanzar con la implementación sostenible, efectiva y concertada de la Ruta de Reincorporación.
Garantías de seguridad y Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) ✓ Puesta en marcha y funcionamiento de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección (2016), ✓ Actualización del Sistema de prevención y alerta a través del Decreto 2124 de 2017 (2017).	...Formular e implementar la política pública para combatir y dismantelar las organizaciones y conductas ilícitas. ... Implementar los cuatro componentes del Programa de Protección Integral. ... Articular las instancias, programas y planes que conforman el SISEP y crear las que hacen falta.
Acción Integral contra Minas Antipersonal ✓ Certificación de <i>Humanicemos DH</i> como operador de desminado humanitario en Colombia (2020). ✓ 432 municipios declarados libres de sospecha de minas de los 715 que presentan algún tipo de afectación (12-2020).	...Fortalecer los mecanismos para garantizar el suministro de información de ubicación y georreferencia de las minas por parte de los exintegrantes de las FARC-EP.
OPORTUNIDADES PARA DINAMIZAR LA IMPLEMENTACIÓN	
► CPEC: Articular el Sistema Nacional de Reincorporación (SNR) bajo los parámetros del CONPES 3931 y del CNR. ► Unidad Nacional de Protección (UNP) y CPEC: Implementar las medidas de protección incluidas en el Auto SAR AI-004-2021 emitido por la JEP (adopción del Plan Estratégico de Seguridad y Protección a través de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección y contratación de los 686 escoltas y 40 analistas de riesgo).	

Gráfico 3a. Niveles mensuales de implementación de las disposiciones del Punto 3 (Dic. 2016 - Feb. 2021)

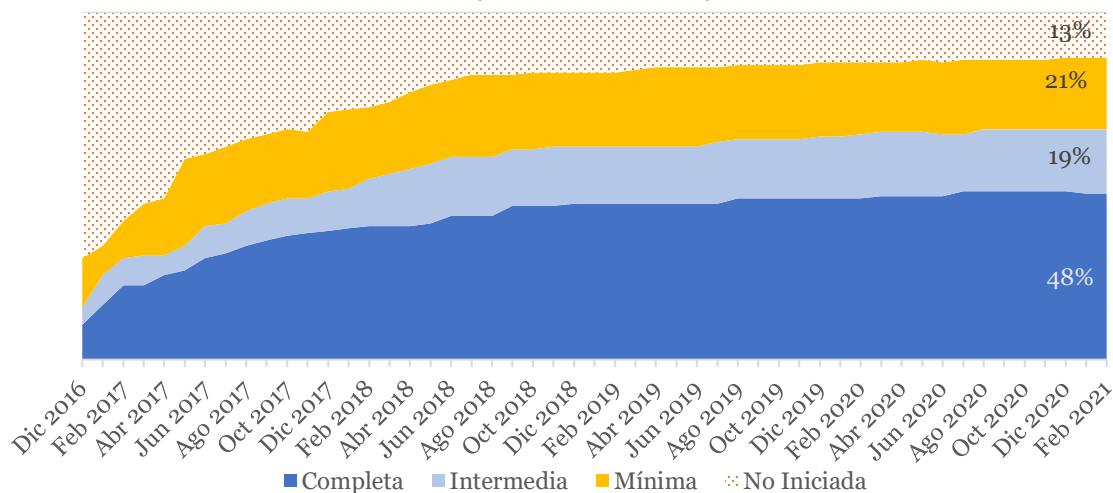
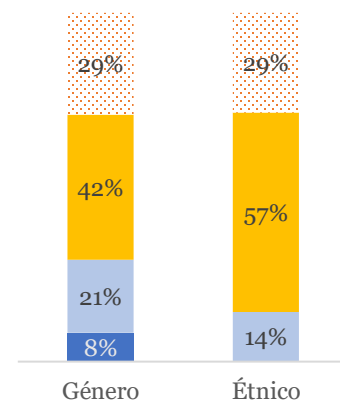


Gráfico 3b. Enfoques diferenciales





Avances bimestrales en el Punto 3

Las acreditaciones de los miembros de las extintas FARC-EP avanzan. Al 9 de febrero de 2021, la Oficina del Alto Comisionado Para la Paz (OACP) reportó que 13.589 personas han sido acreditadas (10.453 hombres y 3.136 mujeres) y 389 fueron retiradas. De estas últimas, 371 fueron excluidas, 12 no fueron acreditadas y 6 revocadas. En el marco de la Mesa Tripartita de Seguridad Jurídica de la CSIVI, 140 personas están en proceso de observación y verificación, y 198 no han sido plenamente identificadas. Finalmente, a la fecha de corte del informe, se han desvinculado 406 personas identificadas como menores de edad⁴².

3.2.2.4
Acreditación y
Tránsito a la
legalidad

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) continuó adoptando medidas normativas para flexibilizar las condiciones de acceso a los beneficios económicos del proceso de reincorporación. Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria declarada desde el 12 de marzo de 2020 por el Ministerio de Salud y Protección Social, el 2 de febrero de 2021 la ARN emitió la Resolución 0066 “Por la cual se extienden medidas transitorias para el otorgamiento de la asignación mensual en el marco del proceso de reincorporación”⁴³.

3.2.2.7. Garantías
para una
reincorporación
económica y social
sostenible

Nuevos municipios declarados sin sospecha de minas. A diciembre 2020, el país completó 432 municipios libres de sospecha de minas de los 715 que presentan algún tipo de afectación. Las operaciones de desminado humanitario se reanudaron a mitad de enero de 2021, sin embargo, la temporada de lluvia ha retrasado las operaciones. A mitad del 2021, se espera que la OACP realice otra entrega de municipios libres de sospecha de minas⁴⁴. Adicionalmente, la OACP reportó que, a diciembre de 2020, se declararon libres de minas antipersonal a 27 resguardos indígenas en los departamentos de Tolima, Huila, Cauca, Risaralda y Antioquia⁴⁵.

3.1.7. Dejación
de las Armas



Retos destacados en el Punto 3 durante el bimestre

Unificación de la metodología de investigación e información relacionada con violaciones y delitos en contra de líderes y lideresas sociales. El 3 de febrero de 2021, en el marco de una sesión Plan de Acción Oportuna (PAO), la Presidencia de la República anunció la creación de una Mesa Intersectorial y una hoja de ruta para unificar metodologías de investigación e información relacionadas con las afectaciones en contra de líderes y lideresas sociales, teniendo como base fundamental las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación (FGN). A esta labor también se articulará la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Defensa Nacional, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales y la PGN⁴⁶.

Críticas sobre los esfuerzos de unificación de cifras. Si bien, la unificación de metodologías para la investigación e información sobre ataques contra líderes sociales ha sido presentada por el Gobierno y las entidades públicas mencionadas como un avance y una oportunidad, las plataformas de derechos humanos lo han recibido con escepticismo y preocupación. Según ellas, hay un alto riesgo de que las cifras no puedan ser contrastadas, que se debilite la labor de la Defensoría y que esto conlleve a la impunidad de los crímenes cometidos contra estas personas. Por lo tanto, según estas organizaciones, el Gobierno y los órganos de control deben informar de forma periódica y suficiente los avances en la metodología, así como los detalles sobre el funcionamiento de la Mesa Intersectorial. También piden que las medidas adoptadas garanticen de cualquier manera el ejercicio autónomo e independiente de los órganos de control y un impulso decidido para que avance la investigación, el juzgamiento y la sanción de todas las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos⁴⁷.

2.1.2.2. Garantías de seguridad para líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos humanos

Se materializan riesgos advertidos en alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. La situación de inseguridad se sigue concentrando en determinados territorios, los cuales presentan múltiples afectaciones ocasionadas por las dinámicas del conflicto. Uno de los casos más críticos lo vive actualmente el municipio de Tarazá en Antioquia donde entre enero y febrero de 2021 se registraron dos masacres que dejaron 7 víctimas mortales⁴⁸, el asesinato de un líder comunal beneficiario del PNIS asesinado⁴⁹ y la desaparición de varios jóvenes⁵⁰. Las afectaciones presentadas desde el último semestre de 2020 en este municipio y, en general, en los demás municipios del Bajo Cauca antioqueño, fueron advertidas por la Defensoría del Pueblo en el documento de alerta temprana N° 045 del 31 de agosto 2020⁵¹.



Rezagos del Punto 3 según el PMI

A febrero de 2021, de los 23 indicadores en el PMI con fecha final entre 2017 - 2020, un total de cuatro a cargo de ARN no tienen ficha técnica en el SIIPO. Dos de ellos (C.238 y C.240) se refieren a los porcentajes de excombatientes en acreditación y con proyectos productivos, mientras los otros dos son del enfoque étnico (C.E.3 y C.E.4) y miden el desarrollo del programa especial de armonización.

Falta de aprobación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección (indicador C.461 del SIIPO). Además de los temas de reincorporación y armonización, el Plan Estratégico de Seguridad y Protección a cargo de la CPEC como delegado presidencial ante la Mesa Técnica de Seguridad y Protección (MTSP) es esencial para construir una visión comprensiva y coordinada de seguridad para la población en proceso de reincorporación y sus familiares. Según el PMI, este indicador debía iniciar en el 2017, pero a febrero 2020 no ha sido aprobado por la MTSP. Si bien este indicador no finaliza hasta el 2026, el Plan Estratégico debe incluir, según el Acuerdo Final, medidas presupuestales y de planeación para mejorar la coordinación de la política de seguridad para la población excombatiente, incluyendo las medidas materiales, inmateriales y simbólicas.



Oportunidades para dinamizar la implementación del Punto 3

Articular el Sistema Nacional de Reincorporación (SNR) bajo los parámetros del CONPES 3931 y del CNR. El 3 de febrero del 2021, la ARN anunció que desde la CPEC se implementará el SNR, el cual integrará las acciones correspondientes a los componentes de la Ruta de Reincorporación. A través de una

circular, la CPEC pidió a 28 entidades focalizar las ofertas en todos los territorios para excombatientes y aportar todos los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos que sean necesarios para asegurar el proceso de reincorporación⁵². Por su parte, el Partido Comunes ha controvertido este anuncio al resaltar que el SNR debió construirse articuladamente en el marco del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), como lo establece el CONPES 3931 y no unilateralmente como lo hizo la CPEC. En este sentido, en febrero del 2021, el componente Comunes del CNR presentó al CNR una propuesta sobre la construcción del SNR⁵³.

Implementar las medidas de protección incluidas en el Auto emitido por la JEP. Desde su último informe, la Misión de Verificación de la ONU denunció que, a pesar de las asignaciones presupuestarias y disposiciones administrativas por parte de la UNP, al 29 de diciembre de 2020, no se habían provisto las vacantes de escoltas y analistas requeridos en el marco de las medidas cautelares proferidas por la JEP en septiembre de 2020⁵⁴. Por medio del Auto SAR AI-004-2021, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SARV) de la JEP ordenó diligencia en la adopción de algunas medidas cautelares colectivas para excombatientes que son comparecientes ante esta jurisdicción⁵⁵. Dentro de las órdenes se encuentran, entre otras, la aprobación y adopción del Plan Estratégico de Seguridad y Protección por parte de la CPEC a través de la MTSP y la contratación de los 686 escoltas y 40 analistas de riesgo que se requieren para atender las solicitudes de protección de la población excombatiente.

En los próximos meses, el Instituto Kroc anticipa avances en las siguientes áreas del Punto 3, que a su vez ofrecen oportunidades para la implementación:

- La construcción de las hojas de ruta para la implementación de la Ruta de Reincorporación.
- La promulgación de un decreto sobre la Política Nacional de Respeto y Garantías a la Labor de Defensa de los Derechos Humanos.

Implementación del Punto 4. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas.

PRINCIPALES AVANCES DESDE 2016 Compromisos en nivel intermedio y completo	PRINCIPALES PENDIENTES A FEBRERO 2021 Compromisos no iniciados o apenas iniciados
Programas de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) ✓ Lanzamiento del PNIS (2017). ✓ Identificadas las iniciativas PDET y formulados los Planes Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA) en 48 municipios PNIS-PDET y 8 municipios PNIS no-PDET (2020).	...Asegurar financiación de los compromisos adquiridos con los beneficiarios PNIS. ...Poner en marcha los proyectos productivos y las iniciativas PISDA que aseguran su sostenibilidad. ...Aprobar la normatividad para el tratamiento penal diferenciado de pequeños cultivadores de coca.
Programas de Prevención del Consumo ✓ Lanzamiento de la <i>Política Ruta Futuro</i> , Pilar 1: Reducir el consumo de drogas y su impacto (2018). ✓ Aprobación de Resolución 089 de 2019 “Por la cual se adopta la Política Integral para la Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas” (2019). ✓ Publicación del CONPES de Salud Mental 3992 (2020).	...Adoptar e implementar las estrategias de la Ruta de Atención de prevención al consumo, particularmente con enfoque de género y étnico.
Solución al fenómeno de la producción y comercialización de narcóticos ✓ Emisión del Decreto 1777 que crea la comisión intersectorial de extinción de dominio (2016). ✓ Aprobación de la Ley 1849 que reforma el Código de Extinción de Dominio (2017). ✓ Lanzamiento <i>Política Ruta Futuro</i> , Pilar 2: reducir la Disponibilidad de Droga, y Pilar 4: Economías y Rentas Criminales (2018).	...Impulsar el proyecto de inversión del Ministerio de Justicia: “Fortalecimiento de la Territorialización de la Política Criminal contra el Crimen Organizado y Efectividad de la Justicia Nacional”. ...Actualizar e implementar el CONPES 3793 de 2013 sobre antilavado de activos e incluir componente de persecución de activos en todo el sistema de rentas ilícitas.

OPORTUNIDADES PARA DINAMIZAR LA IMPLEMENTACIÓN

- Gobiernos regionales, ART, CPEC y Cooperación Internacional: ejecutar las iniciativas PISDA en los núcleos PNIS que garanticen la sostenibilidad y comercialización de los proyectos productivos y el bienestar de las comunidades.
- Gobierno Nacional y Cooperación Internacional: apoyar los modelos y acciones que cubren a quienes quieren optar por la sustitución voluntaria pero no entraron en el PNIS.
- CPEC y Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI): finalizar la concertación y poner en marcha la ruta étnica diferencial PNIS y el protocolo de género PNIS.
- CPEC, DSCI y Parques Nacionales Naturales: terminar de integrar en el modelo Territorios en Conservación a las familias de campesinos en parques que optaron por participar en el PNIS.
- Ministerio de Justicia: reactivar el proceso de diseño del Estatuto de Prevención y Lucha contra las Finanzas Ilícitas.
- Ministerio de Salud: avanzar en la implementación territorial de la Ruta de Atención Integral al consumidor de drogas ilícitas (con enfoque diferencial) y aprobar el decreto para la creación del Programa Nacional de Intervención Integral.

Gráfico 4a. Niveles mensuales de implementación de las disposiciones del Punto 4 (Dic. 2016 - Feb. 2021)

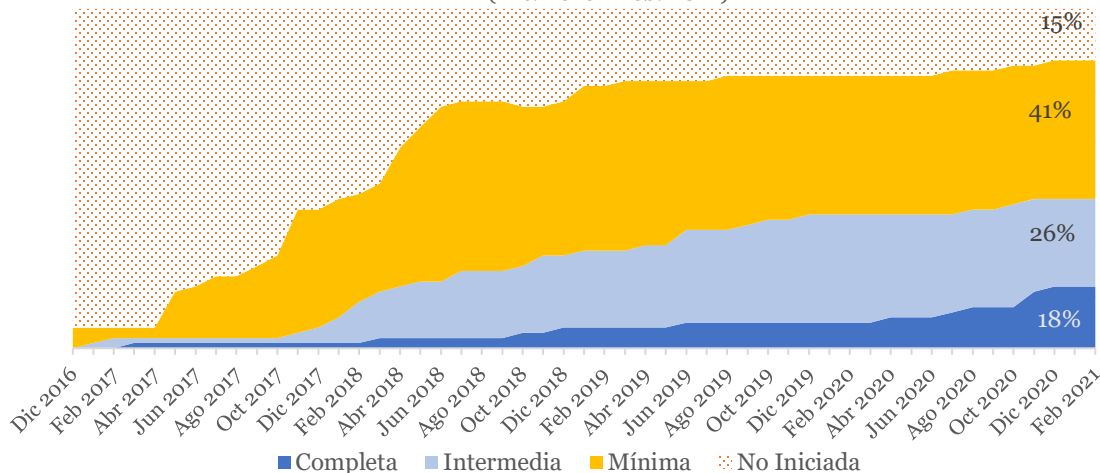
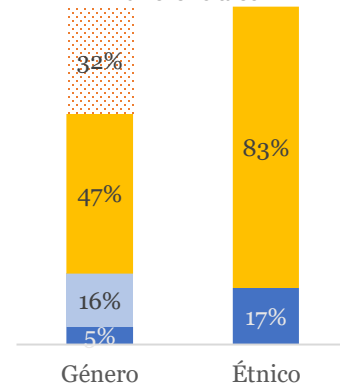


Gráfico 4b. Enfoques diferenciales





Avances bimestrales en el Punto 4

Avances del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) identificadas en el nuevo informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

La UNODC presentó en febrero de 2021 su Informe 23 con cifras de implementación del PNIS con corte hasta el 31 de diciembre de 2020⁵⁶. El informe destaca principalmente el alto nivel de cumplimiento del acuerdo sobre erradicación voluntaria, pues solamente en el 0,8% de las hectáreas erradicadas (43.711), se han presentado fenómenos de resiembra. También, según el informe, de las 82.242 familias inscritas para la Asistencia Alimentaria Inmediata, el 90,9% han recibido por lo menos un pago; el 71,7% ya recibió la totalidad del pago; un 19,3% recibió un pago parcial y el 9% no ha recibido pagos aún. Los niveles más bajos de pago se encuentran en los departamentos de Norte de Santander (76,5%) y Putumayo (85,0%). UNODOC reporta avances continuos en materia de asistencia técnica integral donde 67.665 familias han accedido a la oferta (82,3%), pero sólo 5.516 familias (6,7%) tienen proyectos productivos alternativos activos⁵⁷.

4.1. Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito

Consolidación de los Planes Integrales de Sustitución de Cultivos y Desarrollo Alternativo (PISDA).

La ART reporta en febrero del 2021 que 48% de iniciativas PISDA fueron incluidas en los planes de desarrollo territoriales (PDT)⁵⁸. Esta inclusión facilitará su ejecución pronta al quedar inscritas en diferentes instrumentos de planeación locales y nacionales que impulsan las iniciativas. La Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI) adelantó la consolidación, cierre y adopción de los 48 documentos PISDA en los municipios PNIS–PDET a través de la Resolución 54 del 28 de septiembre de 2020⁵⁹. En noviembre de 2020, se firmaron los Planes Comunitarios PISDA en 8 municipios donde está presente el PNIS⁶⁰, pero que no corresponden con municipios PDET. Hasta diciembre del mismo año, se encontraban en ruta de activación 209 de las 812 iniciativas para los 48 municipios PISDA⁶¹.

4.1.3.5. Construcción participativa y desarrollo de los planes integrales comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo alternativo

Informe de Seguimiento a la Política Nacional para la Promoción de la Salud, la Prevención y la Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas durante el 2020.

En enero de 2021, la Comisión Técnica Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas (CTNRDD) en su último informe de seguimiento a la Política Nacional, recomendó promover estrategias territoriales de prevención integral con énfasis en los enfoques de género y étnico. Este informe también resume las estrategias desarrolladas durante el 2020, en especial: la continuación del Modelo de Intervención Integral de Iniciativas Comunitarias (MI3C) para atender el fenómeno de consumo en los entornos carcelarios; acciones de promoción de salud con especial atención a niños, niñas y adolescentes mediante el programa Cambiando el Chip o la estrategia Ser, Saber y Hacer; y la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población en General como una acción para elaborar investigaciones y estudios relacionados con el consumo de drogas ilícitas.

4.2. Programas de Prevención del Consumo y Salud Pública

Enfoque de género: nueva página web con datos desagregados sobre el consumo

El Observatorio de Drogas de Colombia (ODC) del Ministerio de Justicia cuenta con una sección en su página web “Evidencia técnica sobre mujeres y drogas” cuyo propósito es divulgar información relacionada con la problemática de drogas con un enfoque diferencial de género. Eso es un avance importante pues las cifras e información desagregadas son fundamentales para avanzar en el diseño e implementación de política pública para el tema de drogas con enfoque de género. Esto se lleva a cabo en cumplimiento del indicador del PMI relacionado con las investigaciones sobre género en la cadena del narcotráfico (indicador D.G.10 en el SIIPO). No obstante, hace falta la publicación en esta plataforma virtual de cifras desagregadas por orientación sexual para tener en cuenta el impacto y las necesidades de las personas LGBTI.

**Retos destacados en el Punto 4 durante el bimestre**

Garantizar la financiación del PNIS y ejecución de iniciativas PISDA. Según la CGN, en su “Cuarto Informe sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas de componente para la paz del Plan Plurianual de Inversiones” de julio de 2020, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI) de la ART no ha asegurado los recursos necesarios para que el PNIS pueda cumplir sus compromisos con las familias beneficiarias en 2021⁶². De esto dependerá que se pueda avanzar sustancialmente en los proyectos productivos de corto y largo plazo, necesarios para la transición y recortar distancia con las metas para 2021 y 2022. Igualmente, en el informe se señala que, para asegurar la sostenibilidad de los nuevos proyectos, el Gobierno Nacional y sus pares territoriales deben acelerar la implementación de iniciativas PISDA que permitan la comercialización y faciliten su producción.

4.1. Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito.

Enfoque de género: lideresas y condiciones de seguridad en la sustitución de cultivos

A inicios del 2021, las organizaciones de la sociedad civil, como la Corporación Humanas, alertaron sobre varios obstáculos en la implementación del PNIS y la seguridad para las lideresas del programa en territorio. En el departamento de Putumayo en concreto, la situación de seguridad ha sido compleja para las mujeres dado que los territorios están controlados en gran medida por grupos armados organizados. En la práctica, el enfoque de género en PNIS requiere constante atención por parte de las entidades especializadas del Gobierno Nacional, como la Consejería Presidencial de la Equidad de la Mujer, tanto como de las instancias territoriales que apoyan este tema.

**Rezagos del Punto 4 según el PMI**

Rezagos en indicadores con enfoque étnico y de género. En su última actualización, de los 24 indicadores del Punto 4 con año final entre 2017 - 2019, 14 estaban sin finalizar o sin ficha técnica en el SIIPO. Entre los 14 rezagados, figuran en particular dos indicadores del PNIS con enfoques transversales: diseñar una ruta diferencial para la implementación del PNIS en territorios colectivos de sujetos étnicos (indicador D.E.1 del SIIPO) y adoptar e implementar un protocolo diferencial con enfoque de género en el desarrollo del PNIS (indicador D.G.1). Estos dos indicadores son claves para asegurar la participación de los pueblos étnicos y las mujeres en el proceso de PNIS, y para avanzar con la implementación de las iniciativas con enfoque diferencial del PISDA. Además, hay un tercer indicador rezagado sobre los lineamientos de tratamiento con

enfoque de género, incluyendo a las personas LGBTI, dentro del Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas (indicador D.G.7).



Oportunidades para dinamizar la implementación del Punto 4

Incorporar enfoques diferenciales en el Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas. La DSCI y el Ministerio de Salud, respectivamente, cuentan con la oportunidad de incluir en los procesos de este Programa, las necesidades y los contextos de los grupos diferenciales para poder proveer un servicio efectivo frente al consumo.

Ejecutar prontamente las iniciativas PISDA en los núcleos PNIS que garanticen la sostenibilidad y comercialización de los proyectos productivos y el bienestar de las comunidades. Esto incluye, por ejemplo, la construcción de vías, la electrificación y la provisión de brigadas de salud. Frente a esta oportunidad, son fundamentales los esfuerzos de las alcaldías, gobernaciones, la ART, la CPEC, así como los aportes de la Cooperación Internacional. Tales iniciativas fortalecerían la legitimidad de PNIS y aporta al éxito de los proyectos productivos⁶³.

Finalizar la concertación y poner en marcha la ruta étnica diferencial PNIS y el protocolo de género PNIS por parte de la CPEC y la DSCI. Esto permitirá establecer medidas que reconozcan el impacto diferencial de los cultivos en estas poblaciones, pueblos y comunidades, mejorar sus condiciones de vida y disminuir el riesgo de violencia.

Integrar en el modelo “Territorios en Conservación” a las familias campesinas que optaron por participar en el PNIS. Le corresponde a la CPEC, la DSCI y la Unidad de Parques Nacionales Naturales brindar asistencia técnica diferencial, adjudicación de tierras, reubicación (cuando sea viable) y soluciones alternativas como las relacionadas con Pago por Servicios Ambientales, Ecoturismo u otras, que respeten la vocación de conservación mientras permiten la sostenibilidad de las familias campesinas.

Reactivar el proceso de diseño del Estatuto de Prevención y Lucha contra las Finanzas Ilícitas (ECOFI). Bajo el liderazgo del Ministerio de Justicia, este es un escenario para fortalecer los mecanismos de articulación entre las estrategias de lucha contra las drogas, la participación ciudadana y la protección de los derechos humanos a través de intercambios entre las entidades involucradas en el diseño del Estatuto.

Aprobar el decreto para la creación del Programa Nacional de Intervención Integral. Desde el 2020, el Gobierno Nacional tiene proyectado crear y reglamentar el Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de sustancias psicoactivas (lícitas e ilícitas). La aprobación del proyecto de decreto por parte del Ministerio de Salud permitiría avanzar en la implementación territorial de la Ruta de Atención Integral al consumidor de drogas ilícitas a través de acciones de pedagogía con proveedores y la población beneficiaria.

Por último, en los próximos meses se anticipan avances en las siguientes áreas, que generan oportunidades adicionales de implementación:

- Lanzamiento del decreto “Por medio del cual se formalice la Ruta de Atención Integral del consumo”, y la creación del Programa Nacional de Prevención como una instancia de alto nivel.
- Lanzamiento oficial de la actualización del CONPES “Antilavado de Activos”.
- Estudio de caracterización del Ministerio de Justicia de población para definir público objetivo para la campaña que promueva valores, alerte sobre nuevas modalidades de lavado y fomente la participación y capacidad ciudadana.

Implementación del Punto 5. Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto.

PRINCIPALES AVANCES DESDE 2016 Compromisos en nivel intermedio y completo	PRINCIPALES PENDIENTES A FEBRERO 2021 Compromisos no iniciados o apenas iniciados
Verdad ✓ Acciones por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en Antioquia para proteger a 416 cuerpos en el cementerio La Dolorosa y la realización de 250 diálogos de orientación en la región (01-2021) . ✓ Visita de la CEV a Buenaventura para recoger testimonios y evidencias para la elaboración del informe final (02-2021)Asegurar la coordinación y articulación entre las entidades que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) a nivel territorial. ...Avanzar en el proceso de investigación y juzgamiento de los macro casos que adelanta la JEP, para continuar con el trámite de resolución de conclusiones, sentencias e imposición de sanciones. ...Establecer cronogramas y planes de trabajo concretos en el marco del Plan Nacional de Búsqueda de la UBPD.
Justicia ✓ Imputación por parte de la JEP a ocho miembros de las extintas FARC-EP por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra dentro del Caso 001, “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad” (01-2021) . ✓ Lanzamiento del Manual para la Participación de las Víctimas ante la JEP (11-2020).	
Reparación ✓ Finalización de los tres módulos del Mapa de Victimización por parte de la Unidad de Víctimas (UARIV) (2020). ✓ Publicación de documentos de política pública sobre la caracterización de víctimas en el exterior (09-2020). ✓ Sanción de la prórroga de la Ley 1448 de 2011 (01-2021)Adecuar la Ley 1448 de 2011 con los compromisos en materia de reparación establecidos en el Acuerdo Final. ...Avanzar en la entrega de los bienes y activos de las extintas FARC-EP. ...Avanzar en los procesos de reparación colectiva
Garantías de no Repetición ✓ Creación de la Comisión Asesora de Derechos Humanos y Paz de la Defensoría del Pueblo (2020).	...Avanzar en la aprobación definitiva del Plan Nacional de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Educación de Derechos Humanos.
<u>OPORTUNIDADES PARA DINAMIZAR LA IMPLEMENTACIÓN</u>	
► Los actores involucrados en el conflicto pueden impulsar actos de reconocimiento sobre los hechos ocurridos, con el apoyo de las entidades del Gobierno y del SIVJRNR. ► Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR): realizar una convocatoria amplia e incluyente a la Audiencia de Reconocimiento de Responsabilidad en el Caso 001. ► JEP: continuar la buena práctica de informar sobre los avances que existen en los casos que adelanta la SRVR.	

Gráfico 5a. Niveles mensuales de implementación de las disposiciones del Punto 5 (Dic. 2016 - Feb. 2021)

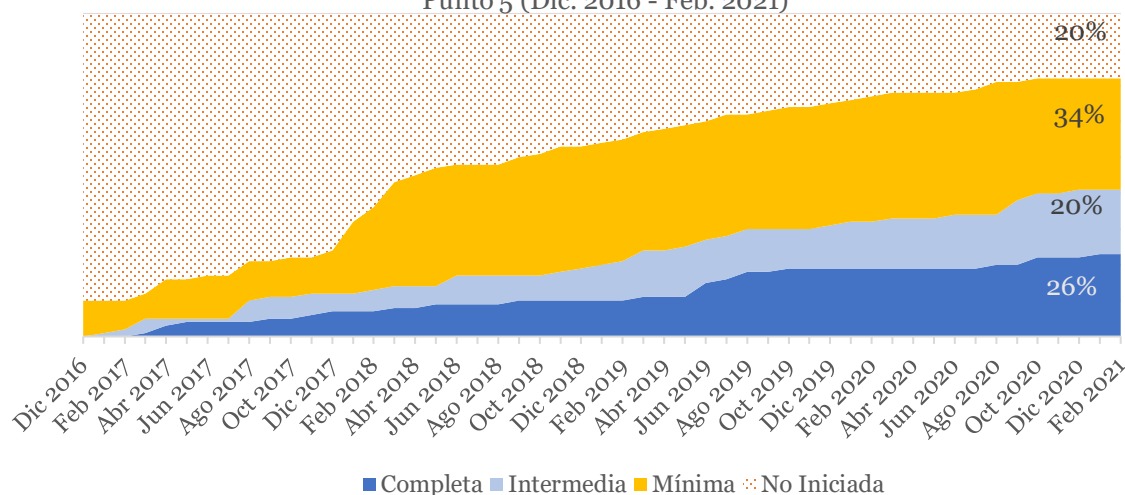
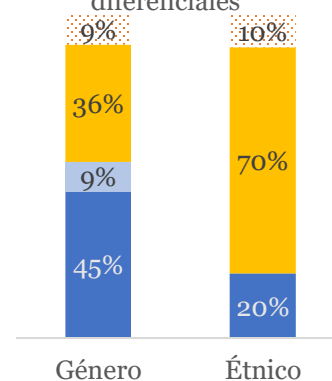


Gráfico 5b. Enfoques diferenciales





Avances bimestrales en el Punto 5

La Unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD) realizó acciones humanitarias en Antioquia. En febrero de 2021, la UBPD, en coordinación con la JEP, adelantó acciones humanitarias para proteger 416 cuerpos en el cementerio La Dolorosa, en Puerto Berrío (Antioquia). Entre los cuerpos se encontraron restos de personas que posiblemente fueron víctimas de desaparición forzada. En el marco de esta acción humanitaria, la UBPD realizó 250 diálogos de orientación con personas de la región, recibió 51 solicitudes de búsqueda de personas y tomó 10 entrevistas con aportantes de información que podrían tener información sobre la ubicación de personas que fueron desaparecidas por causa del conflicto armado⁶⁴.

5.1.1.2. Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto

Imputaciones de la JEP en el Caso 001 “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”. La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) de la JEP profirió el Auto 019 de 2021, por el cual imputó a ocho miembros del antiguo secretariado de las extintas FARC-EP crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra dentro del Caso 001, ahora denominado “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”. Es el primer Auto de determinación de hechos y conductas, lo cual muestra un avance del trabajo que ha venido realizando la JEP para la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación⁶⁵.

5.1.2. Justicia

Organizaciones de mujeres y LGBTI critican vacíos en enfoques diferenciales en la imputación de la JEP en el Caso 001. A partir de la revisión del Auto por parte de las organizaciones de mujeres y plataformas LGBTI, se identificaron varios vacíos. Uno de ellos es la ausencia del enfoque de género en la determinación de hechos de toma de rehenes y privaciones graves de la libertad por parte de exintegrantes de las FARC-EP, la no inclusión de la violencia reproductiva en contra personas LGBTI, y la falta de referencia a la orientación sexual de las personas secuestradas⁶⁶.

Estrategia de priorización interna de la JEP para el Caso 003 “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. El 18 de febrero de 2021, la SRVR de la JEP profirió el Auto 033 de 2021, por el cual publicó su estrategia de priorización territorial para la primera fase de investigación del Caso 003. A través de esta decisión, la Sala priorizó los territorios de Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta para concentrar la primera fase de investigación. En el mencionado Auto, la JEP presentó la cifra de 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, como resultado de un proceso de contrastación de distintas fuentes⁶⁷. Posteriormente, la JEP profirió el Auto 040 de 2021, por medio del cual se corrigieron algunos errores involuntarios de digitación. No obstante, el Auto reiteró la cifra de 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales⁶⁸. Si bien este tipo de errores son involuntarios, implican un riesgo importante para la legitimidad de las actuaciones de la JEP, pues pueden ser usados por algunos sectores adversos a la jurisdicción, minando así la confianza que las víctimas y la sociedad han depositado en ésta.

Vencimiento del término para la entrega de bienes FARC. En febrero de 2021, la CPEC radicó ante la FGN y ante la JEP un informe sobre el proceso de entrega de bienes por parte de las extintas FARC-EP⁶⁹. Dicho informe se entregó con base en lo previsto por el Decreto 1080 de 2020, con el propósito de que las entidades determinen, en el marco de sus competencias, si hay lugar a responsabilidades individuales o colectivas por parte de los miembros de las extintas FARC-EP derivada del proceso de entrega de bienes. Desde la CPEC, se explicó que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) adelantó todas las gestiones necesarias para la individualización y entrega de cada bien incluido en el inventario⁷⁰.



Retos destacados en el Punto 5 durante el bimestre

Pese al vencimiento del término, las extintas FARC-EP aún pueden aportar bienes para la reparación de las víctimas. Si bien el plazo de entrega venció el 31 de diciembre de 2020, la SAE seguirá recibiendo los bienes que las extintas FARC-EP deciden entregar, para que sean destinados a la reparación de las víctimas. Los delegados de las extintas FARC-EP han reiterado en distintos espacios que están comprometidos con la reparación de las víctimas, pero que las condiciones de seguridad en los territorios han dificultado el cumplimiento de dicho compromiso⁷¹. También han señalado que el plazo para la entrega habría sido establecido de manera unilateral por el Gobierno, sin haber consultado con ellos⁷².

5.1.3.7. Adecuación y fortalecimiento participativo de la Política de atención y reparación integral



Rezagos del Punto 5 según el PMI

Según el PMI, a febrero del 2021, se registraron 12 indicadores que se debían completar en 2020 o antes, de los cuales ocho han sido completados, dos no tienen avance (E.E.6 y E.E.7) y uno no tiene reporte (E.311) en el SIPO. Los primeros dos indicadores se refieren al **Plan Nacional de Derechos Humanos, los cuales siguen sin aprobación formal**. Estos indicadores debían haber sido finalizados con un enfoque étnico en el 2018, pero el Plan Nacional de Derechos Humanos aún no cuenta con aprobación formal de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. El tercer indicador sin reporte, a cargo de la UARIV, mide el “porcentaje de actos de reconocimiento de responsabilidad colectiva realizados que decida hacer el Gobierno, las FARC o cualquier otro sector de la sociedad”. Hasta la fecha de corte del informe, el indicador no cuenta con una ficha técnica.



Oportunidades para dinamizar la implementación del Punto 5

Los actores involucrados en el conflicto pueden impulsar actos de reconocimiento sobre los hechos ocurridos, con el apoyo de las entidades del Gobierno y del SIVJRNR. Las personas en proceso de reincorporación cuentan con la oportunidad de continuar con el reconocimiento de su responsabilidad en los hechos cometidos en el marco del conflicto y en la misma vía deben avanzar los sectores de la Fuerza Pública, empresarios y otros que participaron en el conflicto. Estos actos de reconocimiento contribuyen a la garantía de los derechos de las víctimas, siempre que mantenga el espíritu de contribución a la verdad del Acuerdo Final.

Realizar una audiencia pública de reconocimiento de verdad y responsabilidad en el Caso 001 de la JEP. La SRVR debe⁷³ realizar una convocatoria amplia e incluyente a la Audiencia de Reconocimiento de Responsabilidad en el Caso 001 “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”, que involucre a las víctimas acreditadas, garantice su participación efectiva con base en lo dispuesto en el Manual para la Participación de víctimas ante la JEP, incluya los enfoques diferenciales, especialmente el de género y sea sensible a las afectaciones que pueda conllevar este espacio.

Continuar la buena práctica de informar sobre los avances que existen en los casos que adelanta la SRVR de la JEP. Haciendo públicas, en la medida de lo posible, las dinámicas internas de los avances en cada uno de los casos abiertos, la SRVR permitirá a la sociedad en general conocer más de cerca sobre sus progresos y en este sentido generar en la opinión pública mayor confianza en el trabajo de la entidad para garantizar los derechos de las víctimas.

En los próximos meses se anticipan avances en las siguientes áreas, que generan oportunidades adicionales de implementación:

- Publicación de los lineamientos para la aplicación del enfoque de género en el proceso de búsqueda de personas dadas por desaparecidas.
- Audiencia de reconocimiento en el marco del Caso 001 de la JEP.

Implementación del Punto 6. Implementación, verificación y refrendación.

PRINCIPALES AVANCES DESDE 2016 Compromisos en nivel intermedio y completo	PRINCIPALES PENDIENTES A FEBRERO 2021 Compromisos no iniciados o apenas iniciados
Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (CSIVI) ✓ Renovación del mandato de la CSIVI por un año (2020).	... Realizar las sesiones temáticas y territoriales de la CSIVI.
Sostenibilidad, seguimiento y transparencia ✓ Publicación del sitio web del SIIPO (2020). ✓ Activación del Mapa de Inversiones con información sobre la implementación de proyectos de paz (2020).	... Continuar avanzando en los esfuerzos para garantizar la transparencia en la implementación especialmente sobre la ejecución de los recursos para la implementación.
Prioridades de implementación normativa ✓ Aprobación “fast-track” de más de 35 normas (2017).	... Aprobar normas para la participación política y la reforma a la Ley 152 de 1994.
Capítulo Étnico ✓ Financiamiento de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE) hasta el 2022 (2020). ✓ Pilotaje ruta de reincorporación con enfoque étnico con Pueblo Indígena Pastos (2020).	... Concertar el Programa Especial de Armonización para la Reincorporación de Pueblos Afrodescendientes. ... Fortalecer el enfoque colectivo para garantías de seguridad (incluye Guardias Indígena y Cimarrona).
Componente Internacional de Verificación (CIV) ✓ Publicación periódica del informe de verificación por la Secretaría técnica de la CIV (02-2021).	
Acompañamiento internacional en la implementación ✓ Lineamientos CSIVI para el acompañamiento internacional, con apoyo de la ONU, UE y cooperación bilateral (2017).	... Mejorar la coordinación de la provisión de recursos para la implementación del Acuerdo.
Pedagogía y comunicación del Acuerdo Final ✓ Activación de 6 de las 20 emisoras comunitarias (02-2021).	... Capacitar a los operadores comunitarios de las emisoras comunitarias.
OPORTUNIDADES PARA DINAMIZAR LA IMPLEMENTACIÓN	
► CSIVI: realizar la revisión anual de los indicadores del PMI en el marco de la CSIVI. ► Avalar las recomendaciones de la Instancia Especial de Mujeres publicadas el 31 de diciembre de 2020, en concreto: ► Ministerio de Defensa y de Justicia: “desmontar las bandas criminales y a las nuevas expresiones del paramilitarismo” y “avanzar en la investigación y sanción de los autores materiales e intelectuales de los crímenes y masacres perpetrados”. ► ARN: “divulgar el seguimiento al plan de acción del CONPES 3931, en particular en lo relacionado con la reincorporación de las mujeres y población LGBTI.” ► ART: “generar espacios de participación en los territorios PDET para que las mujeres y personas LGBTI hagan seguimiento a su implementación”.	

Gráfico 6a. Niveles mensuales de implementación de las disposiciones del Punto 6 (Dic. 2016 - Feb. 2021)

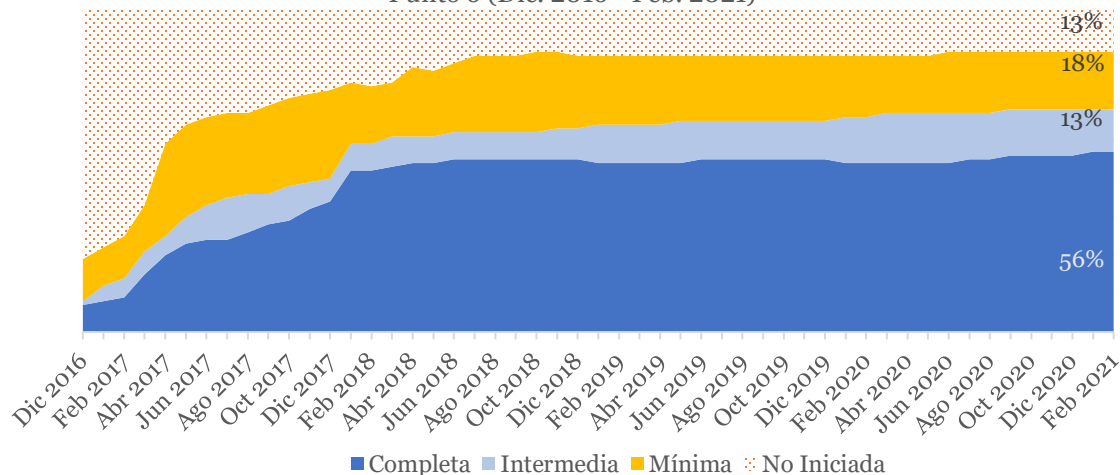
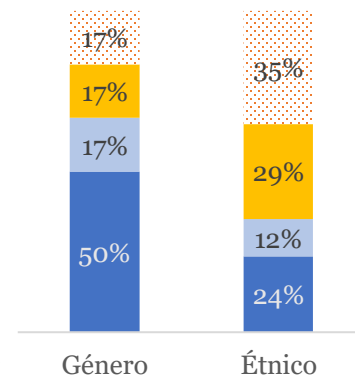


Gráfico 6b. Enfoques diferenciales





Avances bimestrales en el Punto 6

Fortalecimiento al proceso de reporte de información al SIIPO. Como se mencionó en el análisis del Punto 2, la DAFP y la CPEC están trabajando de manera articulada para que las entidades implementadoras realicen de manera oportuna el reporte sobre las acciones realizadas durante el 2020 en cumplimiento de los indicadores del PMI. Con ello, el Gobierno busca fortalecer el SIIPO y los procesos de seguimiento y rendición de cuentas del Acuerdo⁷⁴.

6.1.5. Sistema Integrado de Información y medidas para la transparencia para la Implementación

El Componente Internacional de Verificación (CIV) publicó su Octavo Informe Sobre la Implementación del Acuerdo. En cumplimiento del mandato otorgado en el Acuerdo Final, la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación (CIV) compuesta por CINEP y CERAC presentó el 16 de febrero del 2021 el Octavo Informe Sobre la implementación del Acuerdo⁷⁵. En diciembre, la CSIVI aprobó la prórroga del CIV por un año más, y también aprobó el funcionamiento de cuatro mesas técnicas en la CSIVI: de Acompañamiento internacional, Bienes, Seguridad jurídica y Desminado humanitario.

6.3. Componente internacional de verificación de la CSIVI

Primer informe del Instituto Kroc sobre la implementación del enfoque étnico en el Acuerdo de Paz. El 27 de enero del 2021, el Instituto Kroc publicó un informe especial sobre el estado de implementación del enfoque étnico sobre el periodo comprendido entre noviembre del 2016 y mayo del 2020, con base en 80 disposiciones priorizadas en la matriz étnica elaborada por Instituto Kroc⁷⁶. Entre sus mensajes clave, el informe señala que existe una brecha entre la implementación general del Acuerdo y el enfoque étnico. Los principales avances están relacionados con la participación de los pueblos étnicos en la construcción de los PDET y las actividades desarrolladas por las entidades del SIVJRN. Los retrasos más significativos están en el desarrollo de las rutas étnicas en los procesos de reincorporación y el PNIS.



Retos destacados en el Punto 6 durante el bimestre

Amenazas a las integrantes de la Instancia Especial de Mujeres. En respuesta a la denuncia, finales de 2020, indicando preocupaciones sobre la situación de seguridad de más de la mitad de las representantes de la Instancia Especial de Mujeres⁷⁷, la Vicepresidenta de la República, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, y otras entidades, acordaron tomar medidas preventivas. Una de ellas fue la realización del Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas Colectivo (CERREM) de mujeres en enero de 2021⁷⁸.

6.1. Mecanismos de implementación y verificación

Mejorar el seguimiento a los recursos para la implementación sostenida. Operan varios sistemas para el seguimiento de la implementación del Acuerdo Final y en específico para su financiación, entre ellos el SIIPO, mapa regalías y el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).⁷⁹ Sin embargo, estos sistemas no contienen información completa o actualizada, y no se articulan entre sí porque no son interoperables. Contar con la información completa y actualizada por parte de las entidades implementadoras y el trabajo articulado entre el DNP y la CPEC aportará al control financiero y la transparencia, y facilitará el ejercicio de veeduría y construcción de confianza por parte de la ciudadanía.

6.1.5. Sistema Integrado de Información y medidas para la transparencia para la Implementación

Mejorar la ejecución de los recursos destinados para la implementación. Para los años 2019-2020, la CGN⁸⁰ indica que la ejecución de recursos para la implementación del Acuerdo Final, exceptuando los que tienen como fuente el Presupuesto General de la Nación, no superó el 65,13% de lo que se previó en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2017/2018. Menos del 1% de la ejecución en 2019 fue financiada con recursos del Sistema General de Participaciones, posiblemente por la ausencia de normatividad y lineamientos para el uso de esta fuente para la implementación del Acuerdo Final. En cuanto a los recursos del Presupuesto General dirigidos a financiar las actividades del Acuerdo implementados durante el 2019 y registrados en el PMI, la PGN estableció que sumaron COP \$2,91 billones⁸¹. De éstos, las entidades responsables comprometieron mediante actos y contratos aproximadamente COP \$2,83 billones (97%). Derivado de ellos, durante la vigencia recibieron bienes y servicios por un valor de COP \$2,39 billones (82,4%), con pagos que superaron los COP \$728 mil millones (25%). Más allá del valor aportado por cada proyecto a la implementación del Acuerdo Final, lo relevante es cuantificar la proporción de recursos que las entidades responsables han priorizado o decidido focalizar para la implementación exclusiva del Acuerdo Final.

6.1.2. Medidas para incorporar la implementación de los acuerdos con recursos territoriales

Mejorar la focalización territorial de los recursos. La asignación de recursos en diferentes regiones del país no toma en consideración la priorización de la inversión en las regiones más afectadas por el conflicto armado en el país. Como prueba de ello, en el “Cuarto informe sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas del componente para la paz del Plan Plurianual de Inversiones” de agosto de 2020, la CGN señaló la baja inversión de recursos del Sistema General de Regalías (SGR) dirigidos a la implementación del Acuerdo en las subregiones PDET, puesto que de los COP \$3,33 billones aprobados en proyectos, solamente \$775 mil millones (23%) se han orientado hacia intervenciones en estas comunidades. Se evidencia una baja capacidad técnica en muchas de las autoridades de municipios PDET para formular y estructurar los proyectos que puedan cumplir con los requisitos exigidos por el SGR para ser presentados al OCAD paz, lo que dificulta el acceso a los recursos para la inversión en la paz.

Desafíos para el buen funcionamiento de la CSIVI. A pesar de que la CSIVI sigue funcionando, el Octavo Informe de Verificación de la Implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia del CIV señala que persisten preocupaciones relacionadas con su buen desempeño, como baja calidad de diálogo o efectividad para la resolución de controversias en las reuniones y poca interlocución con la sociedad civil o con el componente de acompañamiento internacional. Además, persiste la dificultad asociada con la inasistencia de todos los delegados del Gobierno Nacional a las reuniones 3x3, lo que es interpretado por el Componente Comunes como una falta de voluntad del Gobierno de implementar integralmente el Acuerdo⁸².



Rezagos del Punto 6 según el PMI

Rezago en el reporte y construcción de fichas técnicas para avanzar en el seguimiento de indicadores del PMI. Si bien durante el 2020 se avanzó con la construcción del portal del SIIPO, su desarrollo depende fundamentalmente de la elaboración de fichas técnicas por parte de las entidades responsables bajo el liderazgo del DNP y el reporte de información respectivo. A fecha de corte del informe,

no se han elaborado y reportado fichas técnicas para para 100 de sus 508 indicadores (el 20%)⁸³. La falta de fichas tiene un impacto negativo tanto en el seguimiento del Acuerdo Final, como en la planeación estratégica y coordinación por parte de las entidades responsables y del Gobierno Nacional frente a las nuevas dinámicas en la implementación territorial. Estas dificultades podrían abordarse en el proceso de revisión anual del PMI por parte del partido Comunes y el Gobierno Nacional en el marco de la CSIVI, la cual está pendiente desde el 2018.



Oportunidades para dinamizar la implementación del Punto 6

Realizar la revisión anual de los indicadores del PMI en el marco de la CSIVI, conforme a lo estipulado en el Acuerdo Final. Esta acción en la CSIVI puede contribuir a fomentar la confianza entre las dos partes firmantes y destrabar algunos cuellos de botella en la implementación. También puede facilitar que la CSIVI tome decisiones de fondo sobre la implementación, como la asignación de medidas de seguridad para exintegrantes de las FARC-EP y sus familias y la agenda normativa de los temas pendientes para la implementación del Acuerdo Final.

Avalar las recomendaciones de la Instancia Especial de Mujeres como mecanismo de seguimiento al enfoque de género. El 31 de diciembre de 2020, la Instancia Especial de Mujeres envió 13 recomendaciones para el 2021 con el propósito de responder a los lapsos e información sobre la implementación⁸⁴, entre los cuales se destacan:

- “Avanzar de manera efectiva en la investigación y sanción de los autores materiales e intelectuales de los crímenes y masacres perpetrados en nuestro país”.
- “El cumplimiento al Punto 3 del Acuerdo en relación al desmonte de las bandas criminales y a las nuevas expresiones del paramilitarismo que hoy azotan los territorios”.
- “Divulgar el seguimiento al plan de acción del CONPES 3931, en particular en lo relacionado con la reincorporación, económica, política y social de las mujeres y población LGBTI”.
- “Entregar el protocolo de incorporación del enfoque de género en el PNIS”.

¹ Para más información, ver “Metodología para el monitoreo de la implementación del acuerdo de paz colombiano” en <https://peaceaccords.nd.edu/barometer/metodologia?lang=es>.

² Estos rezagos se deben a un reporte de avance por debajo de las metas establecidas o a la falta de reporte por parte de entidades responsables.

³ Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), “el PMI tiene el total [de] 501 indicadores concertados, pero en SIPO hay un total de 508 indicadores considerando que para el reporte de los indicadores F.411 y F.E7 responsable PMI “Órganos de control” se dividieron para Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Auditoría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Asimismo, el Indicador A.397 fue dividido para Agrosavia y MinCiencias”. Funcionario (DNP) entrevista realizada por el equipo del Instituto Kroc, Bogotá, Colombia, 17 de diciembre de 2020.

⁴ Fundación Ideas para la Paz, “La Implementación del Acuerdo de Paz en lo local: Los desafíos en medio de la pandemia y las tareas urgentes” (Bogotá, Colombia, diciembre de 2020), http://ideaspaz.org/media/website/FIP_CapitolioTerritorio_Vol8_InformeFinal.pdf; Defensoría del Pueblo, “ALERTA TEMPRANA N° 018-2020” (Bogotá, Colombia, 30 de abril de 2020); Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos, “Vigésimo Noveno Informe del Secretario General al Consejo Permanente sobre la

Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos” (CP/doc.5668/20, 10 de diciembre 2020), <https://www.mapp-oea.org/wp-content/uploads/2020/12/XXIX-Informe-Semestral.pdf>.

⁵ Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia durante el año 2020”, A/HRC/46/76, (10 de febrero de 2021).

⁶ Las cifras de los enfoques transversales son las más recientes disponibles a noviembre de 2020.

⁷ Ministerio de Trabajo, “Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural” (Bogotá, Colombia, 29 de diciembre del 2020), <https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/PLANFES%20.pdf>.

⁸ Ministerio de Trabajo, “Plan Progresivo de Protección Social y de Garantía de Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras Rurales” (Bogotá, Colombia, 29 de diciembre del 2020), <https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/o/Plan+Progresivo+adopci%C3%B3n.pdf/d8a259be-7d13-cd85-bb7a-0082f6548690?t=1598984128245#:~:text=marcha%20dicha%20iniciativa,-El%20Plan%20Progresivo%20de%20Protecci%C3%B3n%20Social%20y%20de%20Garant%C3%ADa%20de,Sector%20Trabajo%20y%20de%20otras>.

⁹ Agencia de Renovación del Territorio, “Documento Final Hoja de Ruta Subregión Sur de Bolívar” (Bogotá, Colombia, enero 2021), <https://www.renovacionterritorio.gov.co/descargar.php?idFile=32400>.

¹⁰ Agencia de Renovación del Territorio, “Documento Final Hoja de Ruta Subregión Sur de Córdoba” (Bogotá, Colombia, enero 2021), <https://www.renovacionterritorio.gov.co/descargar.php?idFile=32401>.

¹¹ Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación (CPEC), “Segundo informe de avances Implementación capítulo étnico del Plan Marco de Implementación” (Bogotá, Colombia, diciembre 2020).

¹² Procuraduría General de la Nación, “Informe sobre el estado de avance de la implementación de las estrategias de acceso a tierras y uso del suelo rural contempladas en el Acuerdo de Paz” (Bogotá, Colombia, 7 de enero del 2021) https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Informe%20sobre%20Acceso%20y%20Uso%20de%20la%20Tierra%20Def%2007_01_2021.pdf.

¹³ Catatumbo, Pacífico Medio, Sur del Tolima, Chocó, Putumayo, Pacífico y Frontera Nariñense, Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño y Sur de Córdoba

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Agencia de Renovación del Territorio, “Documento Final Hoja de Ruta Subregión Catatumbo” (Bogotá, Colombia, julio 2020), <https://drive.google.com/file/d/1oCv4LZ3eHtwo7M2rqLJRSnLTJ33Vg9Bl/view?usp=sharing>.

¹⁷ Agencia de Renovación del Territorio, “Documento Final Hoja de Ruta Subregión Sur de Córdoba” (Bogotá, Colombia, enero 2021), <https://www.renovacionterritorio.gov.co/descargar.php?idFile=32401>.

¹⁸ Agencia de Renovación del Territorio, “Documento Final Hoja de Ruta Subregión Sur de Bolívar” (Bogotá, enero 2021), <https://www.renovacionterritorio.gov.co/descargar.php?idFile=32400>.

¹⁹ Para la Hoja de Ruta de Catatumbo, se calculó el porcentaje de iniciativas en estados de madurez alta, media y baja sobre el número de iniciativas consideradas habilitadas (15% del total). Sin embargo, funcionarios de la ART confirmaron que para las Hojas de Ruta del Sur del Sur de Bolívar y del Sur de Córdoba, se calculó el porcentaje de iniciativas en estados de madurez alta, media y baja sobre el total de iniciativas para la subregión, luego de que el instrumento fuera fortalecido. Para Catatumbo, el 34% de las iniciativas tiene “maduración baja”. Las Hojas de Ruta de Córdoba y Bolívar reportan 81% y 82% de iniciativas con maduración baja, respectivamente.

²⁰ Agencia de Renovación del Territorio, “Documento Final Hoja de Ruta Subregión Catatumbo” (Bogotá, Colombia, julio 2020), <https://drive.google.com/file/d/1oCv4LZ3eHtwo7M2rqLJRSnLTJ33Vg9Bl/view?usp=sharing>.

²¹ Los indicadores PMI rezagados son: A.107, a cargo de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN); A.398, a cargo de la Oficina del Alto Comisionado Para la Paz (OACP); A.421, a cargo de Compra Colombia Eficiente; A.456, a cargo de los respectivos ministerios nacionales; A.E.12, a cargo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT); A.E.18, a cargo de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR).

²² Este compromiso no tiene un indicador en el PMI.

²³ Texto conciliado al proyecto de ley estatutaria N° 409 de 2020, Cámara – 234 de 2020 Senado “Por la cual se expide el código electoral colombiano y se dictan otras disposiciones”, 17 de diciembre de 2020, Gaceta del Congreso. 1516.

²⁴ Trámite de revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 234 de 2020 Senado - 409 de 2020 Cámara, (Corte Constitucional, 2021) (“Por la cual se expide el código electoral colombiano y se dictan otras disposiciones”) https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/consultac/proceso.php?proceso=13&campo=rad_asunto&date3=1992-01-01&date4=2021-03-13&todos=%25&palabra=c%C3%B3digo+electoral.

²⁵ Representantes (Fundación Karisma) entrevista realizada por el equipo del Instituto Kroc, Bogotá, Colombia, 26 de enero de 2021.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Departamento Administrativo de la Función Pública y la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Circular Conjunta 100-001-2021, “Lineamientos para la rendición de cuentas de la implementación del acuerdo de paz”, (Bogotá, Colombia, 25 de enero de 2021).

²⁹ *Ibid.*

- ³⁰ “Escuela de Formación de Líderes Sociales del Ministerio del Interior completó 23.500 cupos asignados entre diplomados y cursos de formación”, Ministerio del Interior, 9 de octubre de 2020, <https://www.mininterior.gov.co/sala-de-prensa/noticias/escuela-de-formacion-de-lideres-sociales-del-ministerio-del-interior-completo-23500-cupos-asignados-entre-diplomados-y-cursos-de-formacion>.
- ³¹ Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación (CPEC), “Informe de gestión Paz con legalidad agosto 2018 – enero 2021, 29 meses” (Bogotá, Colombia, 2021), <http://www.portalparalapaz.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=638>.
- ³² Presidencia de la República, Decreto 003 de 2021, “Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado ‘Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana’” (Colombia, 2021).
- ³³ Sentencia STC7641-2020 del 22 de septiembre de 2020 (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 2020).
- ³⁴ Dejusticia, “Cinco preocupaciones sobre el decreto que reglamenta el uso de la fuerza pública en las manifestaciones sociales” (Comunicado conjunto, 14 de enero de 2021), <https://www.dejusticia.org/cinco-preocupaciones-sobre-el-decreto-que-reglamenta-el-uso-de-la-fuerza-publica-en-las-manifestaciones-sociales/>.
- ³⁵ “Urge pacto por la paz y la reconciliación: monseñor Héctor Fabio Henao”, El Espectador, 27 de febrero de 2021, <https://www.elespectador.com/noticias/nacional/urge-pacto-por-la-paz-y-la-reconciliacion-monsenor-hector-fabio-henao/>.
- ³⁶ Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, “Plan de acción 2020-2021” (Bogotá, Colombia: 21 de octubre de 2020), enviado al Instituto Kroc por correo electrónico.
- ³⁷ Los indicadores PMI rezagados son: B.126, a cargo de la Fiscalía General de la Nación; B.139 y B.E.5 a cargo del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; B.192, B.E.1, B.E.3, y B.E.4 a cargo del Ministerio del Interior; B.441 y B.E.21 a cargo de la Presidencia; B.154 a cargo de la Procuraduría General de la Nación; B.167 y B.G.9 a cargo de la Contraloría General de la República.
- ³⁸ Procuraduría General de la Nación, “Segundo Informe al Congreso sobre el estado de Avance de la Implementación del Acuerdo de Paz, 2020” (Bogotá, Colombia, septiembre de 2020), <https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Segundo%20Informe%20al%20Congreso%20Paz%20-%20Procuradur%C3%ADa%20General%20de%20la%20Nación.pdf>.
- ³⁹ Funcionario (Procuraduría General de la Nación) entrevista realizada por el equipo del Instituto Kroc, Bogotá, Colombia, 8 de febrero de 2021.
- ⁴⁰ Contraloría General de la República, “Cuarto informe sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas del componente para la paz del Plan Plurianual de Inversiones” (Bogotá, Colombia, agosto de 2020), 205, <https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/1885365/Cuarto+Informe+de+seguimiento+a+los+recursos+del+Posconflicto+-+CD+Posconflicto+Final+-+2107.pdf/1e132261-e989-4c7f-a243-f4a66bfb5d3>.
- ⁴¹ Centro de Pensamiento y Diálogo Político (CEPDIPO), “La ‘Paz con legalidad’ al desnudo: Simulación de la implementación y trizas del Acuerdo de Paz con las FARC-EP” (Bogotá, Colombia, febrero 2021), 211, https://cepdiipo.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/02/La_paz_con_legalidad_al_desnudo_web_02252021.pdf.
- ⁴² Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), “Datos de acreditación y tránsito a la legalidad para el Quinto informe del Instituto KROC” (OFI21-00018413 / IDM 13020000, Bogotá, Colombia, 9 de febrero del 2021).
- ⁴³ Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Resolución No. 0066 del 2021 “Por la cual se establecen medidas transitorias para el reconocimiento de la Asignación Mensual en el marco del proceso de reincorporación y se dictan otras disposiciones”, (Bogotá, Colombia, 29 de enero de 2021) http://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Documentos%20Resoluciones/Resolucion_0066.pdf.
- ⁴⁴ *Ibid.*
- ⁴⁵ Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), “Listado de Resguardos”, (Documento interno, Bogotá, Colombia, 4 de marzo del 2021).
- ⁴⁶ “Crean mesa intersectorial para fortalecer protección de líderes sociales”, Presidencia de la República, 3 de febrero de 2021, <https://idm.presidencia.gov.co/prensa/crean-mesa-intersectorial-para-fortalecer-proteccion-de-lideres-sociales-210203>.
- ⁴⁷ Representantes (Somos Defensores) entrevista realizada por el equipo del Instituto Kroc, Bogotá, Colombia, 4 de febrero de 2021.
- ⁴⁸ “No para la violencia en el Bajo Cauca: asesinan a tres personas en Tarazá”, El Espectador, 2 de febrero de 2021, <https://www.elespectador.com/noticias/nacional/denuncian-asesinato-de-tres-personas-en-taraza-antioquia/>.
- ⁴⁹ “En Tarazá reportan el homicidio de un campesino que hacía parte del PNIS”, Caracol Radio, 1 de febrero de 2021, https://caracol.com.co/emisora/2021/02/01/medellin/1612208742_674847.html.
- ⁵⁰ “Sigue misterio en la desaparición de seis jóvenes en vía a Tarazá”, El Colombiano, 4 de marzo de 2021, <https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/continua-el-misterio-por-los-seis-jovenes-desaparecidos-en-la-via-a-caucasia-FE14763341>.
- ⁵¹ Defensoría del Pueblo, “ALERTA TEMPRANA N° 045-2020” (Bogotá, Colombia, 31 de agosto de 2020), <https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/045-20.pdf>.
- ⁵² “Entidades del gobierno ratifican su compromiso para fortalecer la reincorporación de excombatientes de las FARC-EP”, Agencia para la Reincorporación y Normalización, 3 de febrero de 2021, <http://www.reincorporacion.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/Paginas/2021/Entidades-del-gobierno-ratifican-su-compromiso-para-fortalecer-la-reincorporaci%C3%B3n-de-excombatientes-de-las-FARC-EP.aspx>.

⁵³ Componente FARC del Consejo Nacional de Reinserción (CNR), “¿Cuál Sistema Nacional de Reinserción?” (Comunicado, 3 de febrero de 2021), <https://partidofarc.com.co/farc/2021/02/04/cual-sistema-nacional-de-reinsercion/>.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ AUTO SAR AI- 004- 2021 del 21 de enero de 2021, “Ordenar al Consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación y a la Unidad Nacional de Protección el cumplimiento de las órdenes impartidas en los autos AI-008-2020 y AT-132-2020” (Jurisdicción Especial para la Paz, Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, 2021).

⁵⁶ Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, “Monitoreo a la implementación del Plan de Atención Inmediata - componente familiar Informe No. 23”, (Bogotá, Colombia, febrero de 2020) https://www.unodc.org/documents/colombia/2021/Febrero/INFORME_EJECUTIVO_PNIS_No._23.pdf.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Agencia de Renovación del Territorio, “Iniciativas PISDA en planes de desarrollo territoriales y planes de trabajo 20-21 (mesas de impulso)” (Documento de trabajo, Bogotá, Colombia, febrero 2021).

⁵⁹ Dirección para la sustitución de cultivos ilícitos, “Avanza la sustitución con legalidad; Diagnóstico, avances y planeación PNIS, agosto 7, 2018- octubre 31, 2020” (Bogotá, Colombia, noviembre 2020), 45, <http://www.portalparalapaz.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=393>.

⁶⁰ Estos 8 municipios son: Rosas y Piamonte en el Cauca, Ipiales en Nariño, Bolívar, Dagua y El Dovio en el Valle, Cumaribo en Vichada y Barrancón en el Guainía; “Luz verde para 1.444 iniciativas de familias que le dijeron no a la coca”, Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación, 23 de febrero del 2021, <http://www.portalparalapaz.gov.co/publicaciones/1672/luz-verde-para-1444-iniciativas-de-familias-que-le-dijeron-no-a-la-coca/>.

⁶¹ Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, “Monitoreo a la implementación del Plan de Atención Inmediata - componente familiar Informe No. 23”, enero 2021.

⁶² Contraloría General de la República, “Cuarto informe sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas del componente para la paz del Plan Plurianual de Inversiones”, julio 2020.

⁶³ Hasta el momento se encuentran en ruta de activación 209 de 812 iniciativas PISDA identificadas para 48 municipios PDET. Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, “Monitoreo a la implementación del Plan de Atención Inmediata - componente familiar, Informe No. 23”.

⁶⁴ “Unidad de Búsqueda realiza medida de protección a 416 cuerpos que se encontraban en riesgo de desaparición en Puerto Berrio (Antioquia)”, Unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, 17 de febrero de 2021, <https://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/actualidad/unidad-de-busqueda-realiza-medida-de-proteccion-a-416-cuerpos-que-se-encontraban-en-riesgo-de-desaparicion-en-puerto-berrio-antioquia/>.

⁶⁵ Jurisdicción Especial para la Paz, “La JEP imputa al antiguo Secretariado de las Farc-Ep crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra por secuestros” (Comunicado 006 de 2021, 28 de enero del 2021), <https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-imputa-al-antiguo-Secretariado-de-las-FARC-Ep-cr%C3%ADmenes-de-lesa-humanidad-.aspx>.

⁶⁶ @ColombiaDiversa “Desde la Alianza Cinco Claves (tratamiento diferencial de la violencia sexual en el marco del Acuerdo Final de Paz) hacemos un llamado a la @JEP_Colombia para que incorpore una perspectiva de género en las diferentes fases del proceso judicial transicional que adelanta”, <https://twitter.com/colombiadiversa/status/1369994103384121349?s=24> (11 de marzo de 2021).

⁶⁷ Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), “La JEP hace pública la estrategia de priorización dentro del Caso 03, conocido como el de falsos positivos” (Comunicado 019 de 2021, 18 de febrero del 2021), <https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-hace-p%C3%BAblica-la-estrategia-de-priorizaci%C3%B3n-dentro-del-Caso-03.-conocido-como-el-de-falsos-positivos.aspx>.

⁶⁸ Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia), “La Sala de Reconocimiento de la JEP reitera, en el siguiente auto, la cifra de los 6.402 falsos positivos registrados entre el 2002 y 2008. En el auto se corrigen errores involuntarios de digitación, que en nada modifican el universo provisional de hechos en análisis del #Caso03”, Tweet, 5 de marzo de 2021, https://twitter.com/JEP_Colombia/status/1367989487142322180?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1367989487142322180%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fasillavacia.com%2Fdetector-jep-si-reconocio-errores-digitacion-al-auto-sobre-falsos-positivos-mantiene

⁶⁹ “Gobierno radica ante la JEP reporte sobre el trabajo para entrega de los bienes informados por FARC”, Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación, 15 de febrero de 2021, <http://www.portalparalapaz.gov.co/publicaciones/1663/gobierno-radica-ante-la-jep-reporte-sobre-el-trabajo-para-entrega-de-los-bienes-informados-por-farc/>.

⁷⁰ Al vencerse el plazo del 31 de diciembre de 2020 para la entrega de los bienes, las cifras contenidas en el informe muestran lo siguiente: (i.) Las extintas FARC-EP incluyeron en el inventario la suma de COP \$12.070.000.000, y entregaron COP \$2.114.350.000. (ii.) En el inventario se reportaron USD \$450.000 (COP \$1.442.622.675), los cuales fueron todos entregados. (iii.) De 252.500 gramos de oro incluidos en el inventario, se comercializaron 197.047,2 por un valor de USD \$11.285.643,36 (COP \$38.970.000.000), los cuales fueron recibidos. (iv.) De 25.000 gramos reportados, las extintas FARC-EP entregaron 2.540 gramos de oro en joyas. Estos se encuentran en proceso de avalúo para su posterior comercialización. (v.) En el inventario, las extintas FARC-EP incluyeron 722 inmuebles, valorados en COP \$484.604.000.000. De estos, sólo entregaron 37, de los cuales 36 corresponden a bienes baldíos que fueron entregados a la ANT. El único predio privado entregado, se encuentra valorado en COP \$94 millones, y se encuentra bajo la administración de la SAE. Además, 212 inmuebles no serán entregados y 473 inmuebles están en proceso de entrega. (vi.) En el inventario se reportaron 319 vehículos. La SAE solamente recibió la suma de COP \$14.500.000 por la venta de cuatro unidades. (vii.) De 51.992 unidades de bienes muebles y enseres reportados en el inventario,

las extintas FARC-EP entregaron 1.821 unidades, los cuales se encuentran en proceso de avalúo para su posterior comercialización. (viii.) De 24.456 unidades de semovientes incluidos en el inventario, las extintas FARC-EP entregaron 229 unidades, equivalentes a COP \$137.718.650.

⁷¹“Audiencia: Proceso de inventario de bienes de las extintas Farc-EP” (Bogotá, Colombia, 2020), https://www.youtube.com/watch?v=M2T8UXe_aCU&feature=emb_logo&ab_channel=JEPColombia; Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común-FARC, “Estamos cumpliendo con la paz, a pesar de la muerte que nos acosa”, (Comunicado, 31 de diciembre de 2019), <https://partidofarc.com.co/farc/2019/12/31/estamos-cumpliendo-con-la-paz-a-pesar-de-la-muerte-que-nos-acosa/>.

⁷² Ibid.; Centro de Pensamiento y Diálogo Político, “La “Paz con Legalidad” al Desnudo. Simulación de la implementación y trizas del Acuerdo de paz con las FARC-EP”.

⁷³ Según el Artículo 80 de la Ley 1957 de 2019 “Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz”

⁷⁴ Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación (CPEC), Circular Conjunta 100-001-2021, “Lineamientos para la rendición de cuentas de la implementación del acuerdo de paz” (Bogotá, Colombia, 25 de enero de 2021).

⁷⁵ Secretaría técnica del Componente Internacional de Verificación (CIV), “Octavo informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia” (Bogotá, Colombia, febrero 2021), <https://www.cinep.org.co/Home2/component/k2/864-octavo-informe-de-verificacion-de-la-implementacion-del-acuerdo-final-de-paz-en-colombia.html>.

⁷⁶ Iniciativa Barómetro, Matriz de Acuerdos de Paz, Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz. “Informe especial del Instituto Kroc sobre el estado efectivo de la implementación del enfoque transversal étnico del Acuerdo Final de Paz de Colombia” (Universidad de Notre Dame, Notre Dame, IN, y Bogotá, Colombia, febrero 2021). <https://peaceaccords.nd.edu/wp-content/uploads/2021/01/200122-Final-Ethnic-Report-Spanish.pdf>.

⁷⁷ Mujeres Andinoamazonicas, “Suspensión de Representación en la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz” (Comunicado, 25 de noviembre del 2020).

⁷⁸ Funcionaria (Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer) entrevista realizada por el equipo del Instituto Kroc, Bogotá, Colombia, 26 de febrero de 2020.

⁷⁹ Por ejemplo: [Mapa Inversiones](#), [Informes de Gestión del Fondo Colombia en Paz](#) y el [Mapa Inversion PDET](#) de la ART.

⁸⁰ Contraloría General de la República, “Cuarto informe sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas del componente para la paz del Plan Plurianual de Inversiones” (Bogotá, Colombia, agosto de 2020), <https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/1885365/Cuarto+Informe+de+seguimiento+a+los+recursos+del+Posconflicto+-+CD+Posconflicto+Final+-+2107.pdf/1e132261-e989-4c7f-a243-f4a66bf1b5d3>.

⁸¹ Procuraduría General de la Nación, “Segundo informe al Congreso sobre el estado de Avance de la Implementación del Acuerdo de Paz”, septiembre 2020.

⁸² Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación (CPEC), Circular Conjunta 100-001-2021, “Lineamientos para la rendición de cuentas de la implementación del acuerdo de paz” (Bogotá, Colombia, 25 de enero de 2021).

⁸³ Funcionario (Departamento Nacional de Planeación) entrevista realizada por el equipo del Instituto Kroc, Bogotá, Colombia, 17 de diciembre de 2020.

⁸⁴ Instancia Especial para contribuir a garantizar el enfoque de género en la implementación del Acuerdo Final, “Tarjeta de Navidad Instancia Especial de Género” (Bogotá, Colombia, diciembre 2020).